

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
INDOAMÉRICA
CENTRO DE ESTUDIOS DE POSGRADO
MAESTRIA EN DERECHO PROCESAL
MENCIÓN DERECHO PENAL**

TEMA:

“FUNCION DE LA ACUSACION PARTICULAR EN EL PROCESO PENAL PREVISTO EN EL CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL FRENTE A LA VICTIMA COMO SUJETO PROCESAL”

Trabajo de Investigación (componente práctico para el Examen Complexivo) previo a la obtención del Grado de Magister en Derecho Procesal Mención Penal.

AUTOR:

Dr. Carlos Javier Garcés Pérez

TUTOR:

Dr. Geovanny Borja Mg.

Ambato – Ecuador

2017

**AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL AUTOR PARA LA CONSULTA,
REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL, Y PUBLICACIÓN
ELECTRÓNICA DEL TRABAJO DE TITULACIÓN**

Yo, Dr. Carlos Javier Garcés Pérez, declaro ser autor del trabajo de titulación, “Función de la Acusación Particular en el Proceso Penal previsto en el Código Orgánico Integral Penal frente a la víctima como sujeto procesal”, como requisito para optar al grado de “Magister en Derecho Procesal Mención Penal”, autorizo al Sistema de Bibliotecas de la Universidad Tecnológica Indoamérica, para que con fines netamente académicos divulgue esta obra a través del Repositorio Digital Institucional (RDI-UTI).

Los usuarios del RDI-UTI podrán consultar el contenido de este trabajo en las redes de información del país y del exterior, con las cuales la Universidad tenga convenios. La Universidad Tecnológica Indoamérica no se hace responsable por el plagio o copia del contenido parcial o total de este trabajo.

Del mismo modo, acepto que los Derechos de Autor, Morales y Patrimoniales, sobre esta obra, serán compartidos entre mi persona y la Universidad Tecnológica Indoamérica, y que no tramitaré la publicación de esta obra en ningún otro medio, sin autorización expresa de la misma. En caso de que exista el potencial de generación de beneficios económicos o patentes, producto de este trabajo, acepto que se deberán firmar convenios específicos adicionales, donde se acuerden los términos de adjudicación de dichos beneficios.

Para constancia de esta autorización, en la ciudad de Ambato, a los dos días del mes de febrero del dos mil diecisiete, firmo conforme:

Autor: Dr. Carlos Javier Garcés Pérez.

Firma

Número de Cédula: 1802464915

Dirección: calle Maximiliano Rodríguez y pasaje S/N, parroquia Atahualpa,
cantón Ambato.

Correo Electrónico: c.j.gp@hotmail.com

Teléfono: 032 520634 0984049890

CERTIFICACION

En mi calidad de Director del Trabajo de Investigación (componente investigativo para el Examen Complexivo) “FUNCION DE LA ACUSACION PARTICULAR EN EL PROCESO PENAL PREVISTO EN EL CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL FRENTE A LA VICTIMA COMO SUJETO PROCESAL” presentado por Dr. Carlos Javier Garcés Pérez para optar por el Grado de Magister en Derecho Procesal mención Derecho Penal, **CERTIFICO**, que dicho Trabajo de Investigación ha sido revisado en todas sus partes y considero que reúne los requisitos y méritos suficientes para ser sometido a la presentación pública y evaluación por parte del tribunal examinador que se designe.

Ambato, febrero de 2017.

Dr. Geovanny Borja

C.C. 1715664643.

DIRECTOR

DECLARACION DE AUTENTICIDAD

Quien suscribe, declaro que los contenidos y los resultados obtenidos en el presente Trabajo de Investigación (componente investigativo para el examen Complexivo), como requerimiento previo para la obtención del Grado de Magister en Derecho Procesal Mención Penal, son absolutamente originales, auténticos y personales y de exclusiva responsabilidad legal y académica del autor.

Dr. Carlos Javier Garcés Pérez

Autor

CI 1802464915

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA INDOAMÉRICA
APROBACIÓN DEL TRIBUNAL DE GRADO

El Trabajo de Investigación (componente investigativo para el Examen Complexivo) “**FUNCION DE LA ACUSACION PARTICULAR EN EL PROCESO PENAL PREVISTO EN EL CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL FRENTE A LA VICTIMA COMO SUJETO PROCESAL**” ha sido revisado, aprobado y autorizado su impresión y empastado, previa la obtención del Grado de Magister de Derecho Procesal Penal; por lo tanto autorizamos al postulante a la presentación a efectos de su sustentación pública.

Ambato, febrero 2017

Para constatación de Firma

.....

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL

.....

VOCAL 1

.....

VOCAL 2

DEDICATORIA

A mis Padres Luis Gerardo y Teresita de Jesús, a mis hijos Cristina Fernanda y Carlos Elian, a mi cónyuge Ab. Blanca Sánchez, y a toda mi familia, que me impulso a culminar con mis estudios.

Carlos Javier Garcés Pérez

AGRADECIMIENTO

A todas aquellas
personas que
coadyuvaron para que
el presente trabajo
llegue a su
culminación.

Gracias

ÍNDICE GENERAL

ÍNDICE DE CONTENIDOS

Portada.....	i
Autorización por parte del Autor para la consulta.....	ii
Certificación Tutor.....	iv
Declaración de autenticidad.....	v
Aprobación Tribunal.....	vi
Dedicatoria	vii
Agradecimiento.....	viii
Índice de Contenidos	ix
Resumen Ejecutivo.....	xi
Abstract.....	xii

CAPITULO I

INTRODUCCCIÓN

Tema.....	1
Antecedentes.....	1
Diagnóstico.....	5
Justificación.....	6
Objetivos.....	7

CAPITULO II

METODOLOGÍA

Metodología.....	8
------------------	---

CAPITULO III

PROPUESTA

Desarrollo.....	11
-----------------	----

CAPITULO IV

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones	45
--------------------	----

Recomendaciones	46
-----------------------	----

BIBLIOGRAFÍA	47
--------------------	----

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA INDOAMÉRICA
CENTRO DE ESTUDIOS DE POSGRADO
MAESTRÍA EN DERECHO PROCESAL MENCION PENAL
RESUMEN EJECUTIVO**

TEMA:

"FUNCION DE LA ACUSACION PARTICULAR EN EL PROCESO PENAL PREVISTO EN EL CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL FRENTE A LA VICTIMA COMO SUJETO PROCESAL"

AUTOR

Dr. Carlos Javier Garcés Pérez

TUTOR

Dr. Geovanny Borja Mg.

RESUMEN

El presente trabajo tiene lugar dentro del Código Orgánico Integral Penal referente a la Acusación Particular que se encuentra en el Libro Segundo Título II Capítulo Cuarto Arts. 432 al 438 incluso, la cual se puede presentar desde el inicio de la instrucción hasta antes de su conclusión, cumpliendo los requisitos que se encuentran en el Art. 434 y tiene como finalidad el de reclamar el derecho de la víctima a la reparación integral que ha sufrido por el daño causado, sin embargo éste derecho, el de la reparación integral, es reconocido incluso si no se presentare acusación particular, que a su vez puede ser material o inmaterial del derecho lesionado, es decir para que el acusado indemnice a la víctima, como lo señala el Art. 77 del Código Orgánico Integral Penal; a pesar de que se incluye ésta figura legal en el mencionado Código, no es una situación que deba obligatoriamente presentarse a trámite ya que el vocablo “podrá” es facultativo, no imperativo, por tanto bien puede la víctima no presentar ninguna Acusación Particular, y no por esto el Juzgador va a dejar de ordenar que el acusado repare el daño causado a la víctima. El trabajo recurre del nivel teórico al práctico; de lo abstracto a lo concreto, problematizado de acuerdo con el tema, la propuesta y los objetivos indicados, en base a la recopilación bibliográfica y doctrina jurídica, con indagación, análisis, síntesis, por tanto se llega a la conclusión de que no es necesaria la presentación de la acusación particular para que a la víctima le sea reconocido su derecho a la reparación integral, ya que éste es un requisito de la sentencia per se.

DESCRIPTORES: acusación, daño, particular, reparación, víctima.

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA INDOAMÉRICA
CENTRO DE ESTUDIOS DE POSGRADO
MAESTRÍA EN DERECHO PROCESAL MENCION PENAL
ABSTRACT**

THEME:

**"FUNCTION OF THE PARTICULAR ACCUSATION IN THE PENAL
PROCESS ESTABLISHED IN THE INTEGRAL PENAL ORGANIC
CODE FRONT OF THE VICTIM AS A PROCEDURAL SUBJECT"**

AUTHOR

Dr. Carlos Javier Garcés Pérez

TUTOR

Dr. Geovanny Borja Mg.

ABSTRACT

Present work takes place within the Integral Penal Organic Code Concerning the Particular Accusation, which is found in the Second Book Title II Chapter Four Art. from 432 to 438, which can be presented from the beginning of the instruction until before its conclusion, fulfilling the requirements that are found in Art. 434 and its purpose is to claim the right of the victim to the integral reparation that has suffered for the damage caused, however this right, the one of the integral repairing, can be recognized even if there is no private accusation, this repair may be material or immaterial of the injured right, that is, for the accused to compensate the victim, as states Integral Penal Organic Code in Art.77; although this legal figure is included in the Code, it is not a situation that must be submitted to procedure, since the word "may" is optional, not imperative, therefore it is possible for the victim not to submit any Particular Accusation, and not for this reason the Judge will stop ordering the accused to repair the damage caused to the victim, current work draws from the theoretical to the practical level; From the abstract to the concrete, problematized according to the theme, proposal and indicated objectives, based on the bibliographical compilation and legal doctrine, with inquiry, analysis, synthesis, therefore, it is concluded that it is not necessary to present the particular accusation, so that the victim is entitled to full reparation, since this is a requirement of the sentence itself.

KEYWORDS: accusation, hurt, particular, repairing, victim.

CAPITULO I:

INTRODUCCION

TEMA: “FUNCIÓN DE LA ACUSACIÓN PARTICULAR EN EL PROCESO PENAL PREVISTO EN EL CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL FRENTE A LA VÍCTIMA COMO SUJETO PROCESAL.”

ANTECEDENTES

La Constitución de la República del Ecuador que rige el Estado ecuatoriano marca la pauta de que todas las leyes secundarias deben guardar conformidad con sus postulados y principios, esto en virtud del Art. 424 inciso primero, por tanto el Derecho Penal al ser parte del ordenamiento jurídico también observa y se somete a la Carta Magna, so pena de ser declarado inconstitucional y por ende no tener eficacia jurídica ni probatoria.

Luego del Preámbulo, en el Art. 1 de la Constitución de la República, dice: “El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada.”, por lo que en la actuación de servidoras y servidores de la justicia, se observará de manera imperativa los principios y disposiciones constitucionales como una garantía de los derechos y limitaciones del poder estatal para la efectiva ejecución de la justicia, para beneficio de las partes entre ellas el de las víctimas, tal como lo señala también el Art. 52 del COIP, el cual determina los fines de la pena: - la prevención general para la comisión de los delitos; - el desarrollo progresivo de los derechos y capacidades de la persona con condena; y, la reparación del derecho de la víctima.

Bajo esta premisa, en la mencionada Constitución en el Art. 75 indica: “Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por la ley.”; el Art. 76 dice: “En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de

cualquier orden se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas: 1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el cumplimiento de las normas y los derechos de las partes.”; a su vez el Art. 78 íbidem establece claramente: “Las víctimas de infracciones penales gozarán de protección especial, se les garantizará su no revictimización, particularmente en la obtención y valoración de las pruebas, y se las protegerá de cualquier amenaza u otras formas de intimidación. Se adoptarán mecanismos para una reparación integral que incluirá, sin dilaciones, el conocimiento de la verdad de los hechos y la restitución, indemnización, rehabilitación, garantía de no repetición y satisfacción del derecho violado. Se establecerá un sistema de protección y asistencia a víctimas, testigos y participantes procesales.”

Con este articulado se observa que la víctima de un delito tiene a su favor protección especial en cuanto al derecho que no sea re victimizada, esto es que no vuelva a ser sujeto de delito, ni a recordarlo, es un ámbito garantista de sus derechos constitucionales.

En la actualidad y para tratar el tema referente a la función de la Acusación Particular dentro del Código Orgánico Integral Penal frente a la víctima como sujeto procesal, en cuanto tiene que ver a los delitos de acción penal pública, el argumento es que si no se presenta la acusación de todas maneras en la sentencia se va a considerar y reconocer la indemnización a la víctima a título de reparación integral ya que a más de ser un requisito de la misma, es un derecho que el Estado reconoce a la víctima, ya que es una interpretación progresiva de los derechos, y al ser considerado la indemnización de daños y perjuicios dentro de la sentencia es un derecho que le asiste a la víctima, el Juez debe establecer obligatoriamente el monto de la indemnización en la sentencia condenatoria.

La función de la Acusación Particular es opcional, esto es que existe la posibilidad de que la víctima la presente o no, puesto que es un requisito de la sentencia, a diferencia del anterior Código de Procedimiento Penal donde se establecía que a través de la presentación de la acusación particular siempre que se dicte una sentencia condenatoria se ordenaba el pago de los daños y perjuicios, en éste caso se debía tramitar el pago en juicio verbal ante el Presidente del Tribunal de Garantías Penales que dictó la sentencia, ésta competencia se encontraba establecida en el artículo 31, numeral 1, literal b) del mencionado Código.

El Dr. Walter Guerrero Vivanco (2004), en su obra Derecho Procesal Penal Tomo II la Acción Penal, ya preveía: *“Justamente, en la edición anterior de este tomo, nosotros decíamos que en el futuro no habrá razón para que se entablen las actuales contiendas civiles entre las partes ni para que el ofendido intervenga en un largo y doloroso proceso penal en contra del infractor, porque bastará que denuncie el delito a los fiscales correspondientes, para que luego de la*

investigación respectiva, presenten su acusación ante los jueces imparciales, apliquen la norma de conducta, amonesten, corrijan o reeduchen científicamente a quien hubiera transgredido las reglas de comportamiento por todos aceptadas e implanten, de nuevo, la paz y la tranquilidad en el grupo. Pero queremos aclarar, en forma definitiva, que nosotros no propiciamos la impunidad delictiva ni el desamparo ciudadano. Lo que sostenemos es que dentro de esta visión futurista, el Estado debe asumir la tarea de administrar justicia, sin la necesidad de la intervención del ofendido dentro del proceso penal. En otras palabras, el fiscal investiga y acusa, y los jueces dictan la sentencia y condenan al infractor a las penas previstas en la Ley y al pago de los daños y perjuicios ocasionados, a menos, naturalmente, que la sentencia sea absolutoria. Sin embargo, para que esto ocurra, se necesita un cambio fundamental en la estructura de la Función Jurisdiccional y del Ministerio Público, porque en la actualidad, si el ofendido con el ilícito no se presenta como acusador particular a ejercer la pretensión penal e impulsar el trámite del proceso, la maquinaria de la administración de justicia tiene serias dificultades para descubrir por sí sola la existencia del delito y comprobar la culpabilidad del procesado.” (pp. 125-126).

En la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre, se dio un paso positivo en esa dirección, al disponer que toda sentencia condenatoria de carácter penal debe contener la obligación del infractor de pagar los daños y perjuicios derivados del acto punible se haya o no presentado el ofendido como acusador particular en el proceso principal. Con estos criterios se redactó el proyecto del nuevo Código de Procedimiento Penal (2000), que a la final, después de varios cambios, fue aprobado por el Congreso Nacional y entró a regir a partir de julio del 2002.

El Dr. José Luis Jaramillo, del Ministerio Público de Pichincha en un reportaje publicado en el diario El Telégrafo el 18 de marzo del 2014 ha dicho: “La reparación de la víctima es una garantía en el COIP. En las audiencias se trata de reparar el daño ocasionado a la víctima de alguna infracción de tipo penal, como lo establece el COIP. El nuevo Código Orgánico Integral Penal ha destinado el título III sobre derechos, para desglosar y asegurar todas las aristas tendientes a proteger a la víctima, a la que asigna 12 garantías encaminadas principalmente a la reparación y protección. Incluso los extranjeros tienen los mismos derechos y se les permitirá la estadía temporal o permanente dentro del territorio nacional, dependiendo del caso, por razones humanitarias o personales en el evento de ser participantes de un proceso. El artículo 11 se refiere a todos los derechos que tiene la víctima inmersa en un juicio: 1. A poner acusación particular, a no participar en el proceso o dejar de hacerlo en cualquier momento, de conformidad con las normas de este Código. En ningún caso se obligará a la víctima a comparecer. 2. A la adopción de mecanismos para la reparación integral de los daños sufridos que incluyen, sin dilaciones, el conocimiento de la verdad, de los hechos, el restablecimiento de los derechos lesionados, la indemnización, la garantía de la no

repetición de la infracción, la satisfacción del derecho violado y cualquier otra forma de reparación adicional que se justifique en cada caso. 3. A la reparación por las infracciones que se cometan por agentes del Estado o por quienes, sin serlo, cuenten con su autorización. 4. A la protección especial resguardando su intimidad y seguridad, así como la de su familia y sus testigos. 5. A no ser revictimizada particularmente en la obtención y valoración de las pruebas, incluida su versión. Se le protegerá de cualquier amenaza u otras formas de intimidación y, para el efecto, se podrán utilizar medios tecnológicos. 6. A ser asistida antes y durante la investigación por una o un defensor público o privado. 7. A ser asistida por un traductor o intérprete. 8. A ingresar al sistema nacional de protección y asistencia de víctimas y testigos. 9. A recibir asistencia integral de profesionales adecuados de acuerdo con sus necesidades durante el proceso penal. 10. A ser informada por la o el fiscal de la investigación preprocesal. 11. A ser informada aun cuando no haya intervenido en el proceso. 12. A ser tratada en condiciones de igualdad y cuando amerite aplicar medidas de acción afirmativa que garanticen una investigación, proceso y reparación, en relación con su dignidad humana. En el código anterior -aún vigente- el tratamiento de la víctima era nulo, no existía un enfoque de atención y era de carácter accesorio meramente informativo. “Por eso en el modelo constitucional de 2008 la Carta Magna ya señala entre las innovaciones del modelo jurisdiccional, la del enfoque a la víctima y destaca 2 derechos en particular: el de la reparación integral y el de la representación por parte de la Fiscalía General del Estado.”

El experto también ha señalado que no puede haber justicia únicamente con la sanción, sino con la restauración, con la garantía de que la víctima conocerá la verdad, quién ocasionó un daño y que será sancionado, y la restitución de derechos puede realizarse de distintas maneras, según la nueva normativa. Además, el mencionado profesional ha estimado que es un desarrollo normativo muy exhaustivo de la garantía constitucional de restitución de derechos de la víctima y del enfoque con que la Fiscalía debe actuar en la aplicación y observancia de 3 principios básicos: oportunidad, mínima intervención y con enfoque a la protección de los derechos de la víctima. “Esto sienta las bases de los derechos de las víctimas en el marco de una investigación y de un proceso penal.” (El Telégrafo, 2014, marzo 18).

Por tanto, el tema propuesto tiene relación con la figura legal de la Acusación Particular establecida para los delitos de acción penal pública que se encuentra en el Libro Segundo Título II Capítulo Cuarto Arts. 432 al 438, la cual se puede presentar desde el inicio de la instrucción hasta antes de su conclusión, cumpliendo los requisitos que se encuentran en el Art. 434 y tiene como finalidad el de reclamar el derecho de la víctima a la reparación integral que ha sufrido por el daño causado, a pesar de que éste es un requisito que debe contener la sentencia, por tanto el derecho de la víctima está contemplado en el Art. 78 de la

Constitución de la República, sin embargo para mi modo de ver la acusación particular con el transcurso del tiempo ha perdido vigencia.

1. 1.- Diagnóstico.

En el que se apoya el presente trabajo conforme la doctrina tenemos en primer lugar la cuestión de dirimir si la acusación es particular o privada, ya que el legislador ha tratado éste tema dentro del COIP, como si fueran figuras legales idénticas, cuando en realidad son totalmente diferentes y tener un alcance claro de lo que significa la acusación particular y lo que es la acusación privada, a pesar de que aparentemente tengan similitudes entre sí.

Tomado éste postulado y según la clasificación o naturaleza jurídica de la acción penal, los delitos que se persiguen a través del ejercicio público de la acción (delitos de acción pública) y los otros que se persiguen mediante el ejercicio privado de la acción penal (delitos de acción privada), se deriva la manera cómo la víctima puede llegar a formar parte del proceso penal, en cada uno de los casos, esto es como medio la Acusación Particular, para los primeros desde el inicio de la instrucción hasta antes de su conclusión; y, por medio de acusación privada para los segundos, cuando la víctima u ofendido “decide ejercer la acción penal sobre la base de un derecho que le es privativo y lo hace mediante una querella.” Vaca A. R. (2014) “Derecho Procesal Penal Ecuatoriano” (p. 481).

El Dr. Ricardo Vaca Andrade en su libro “Derecho Procesal Penal Ecuatoriano” respecto del tema planteado dice: “En los delitos de acción pública, la víctima, en los términos del Art. 432 del COIP puede presentarse ante el Juez penal luego de que se le ha notificado con el inicio de la Instrucción hasta antes de su conclusión; y una vez admitida su acusación, intervenir en el proceso penal en calidad de sujeto principal, con el mismo derecho que tienen las otras partes, con la finalidad de impulsarlo hasta conseguir que se hagan efectivas las acciones punitivas y resarcitorias a que hubiere lugar. El mecanismo a través del cual llega a formar parte del proceso penal es la ACUSACION PARTICULAR. En los delitos de acción privada en los que los responsables sólo pueden ser sancionados tomando como punto de partida la decisión personal de la víctima, el medio de ejercer la acción penal es la ACUSACION PRIVADA, que se contiene en una querella en la que se expresa la voluntad de la víctima de acudir al órgano de justicia para pedirle de modo categórico que se inicie el proceso penal y que se lo sustancie hasta conseguir que los responsables sean condenados a las penas contempladas en la ley y al pago de daños y perjuicios. En consecuencia, si no hay un acusador privado que ejerza la acción penal, no puede existir proceso penal. Estos delitos se denominan de acción privada, aunque en el COIP se los ha cambiado de nombre, porque la decisión de ejercer o no la acción penal está reservada privativamente de modo exclusivo al ofendido o a la víctima, quien

puede o no hacerlo según su propia voluntad y conveniencia. En el CPP de 1983 se denominaban “delitos que sólo pueden juzgarse mediante acusación particular”, (Arts. 428 y siguientes) siendo así que, como hemos visto, no eran de acusación particular sino, en estricto rigor, de acusación privada. Ahora, en cambio, en el Art. 647 del COIP y siguientes, ya no se habla ni de acusador particular ni de acusador privado, sino de querellante.

Dice el mencionado autor que en el COIP se distinguen dos fundamentos para la acusación así: constituir una declaración de voluntad de ser parte procesal (objetivo primordial) y la de ser expresión de conocimiento para el Juez a la vez que ejercicio privado de la acción penal (finalidad accesorio o eventual), que no debían tener el mismo tratamiento en la ley procesal penal ecuatoriana.

1.2- Declaración del problema.

El problema radica en establecer que la acusación particular es o no necesaria presentarla en los delitos de acción penal pública a fin de que sea reparada en forma integral la víctima o simplemente es un postulado que en la práctica no tiene razón de ser, ya que su función ha perdido vigencia, por lo que al final de este trabajo se presentará una propuesta de solución, la cual sería derogar el capítulo que contiene la acusación particular para los delitos penales de acción pública en el COIP.

1.3.- Justificación

El presente trabajo tiene su **originalidad** ya que se desarrolla en el ámbito del Código Orgánico Integral Penal referente a la Acusación Particular que se encuentra establecida en el Libro Segundo Título II Capítulo Cuarto Arts. 432 al 438, que se la estudiará en el ámbito legal, a fin de establecer cuál es su función con respecto a la víctima habida cuenta de que conforme la Constitución de la República, esta goza de protección especial, con la finalidad de que no se produzca su re victimización, que de todas maneras si no se presentare acusación particular se reconocerá su derecho a ser indemnizado, investigación novedosa.

Interés.- El proyecto es de valor y carácter jurídico de derecho adjetivo, es relevante, significativo, de trascendencia social cuyo propósito es generar conocimientos y debate en la comunidad jurídica, que irá en beneficio de los estudiantes de Derecho, Abogados en libre ejercicio profesional, sociedad civil y todos (as) las personas que se interesen por el tema, para dar una solución viable a la existencia o no de la acusación particular.

Tiene su **importancia**, en tanto y en cuanto, la acusación particular para la mayoría de Abogados es una herramienta que ayuda a que a la víctima se le reconozca daños y perjuicios, cuando actualmente esto ya no es necesario.

Existe **factibilidad** técnica, teórica y de estudio porque se recurrirá a fuentes bibliográficas y especializadas en el tema, hay la disponibilidad presupuestaria y bibliográfica, que se utiliza en todo trabajo investigativo a fin de obtener óptimos resultados.

La reparación integral de la víctima está contemplada en el Art. 77 del Código Orgánico Integral Penal. Sin embargo, a pesar de que se incluye ésta figura legal en el Código Orgánico Integral Penal, no es una situación que deba obligatoriamente presentarse a trámite ya que el vocablo “podrá” es facultativo, no imperativo, por tanto bien puede la víctima no presentar ninguna Acusación Particular, y no por esto el Juzgador va a dejar de ordenar que el acusado repare el daño causado a la víctima.

El Derecho Penal es una ciencia social, vinculada precisamente a toda la sociedad, que debe en todo momento mantenernos en un estado de alerta a las situaciones cambiantes que se pueden dar en determinado momento en el quehacer social de los individuos para que no se vulnere el derecho que tienen las víctimas.

1.4.- Objetivos

1.4.1.- General: Estudiar las normas contempladas en el Código Orgánico Integral Penal respecto de la Acusación Particular.

1.5.- Específicos:

1.5.1 Analizar la figura jurídica de la acusación particular desde un punto de vista etimológico y procesal, así como los efectos que ésta produce en el proceso penal.

1.5.2 Determinar qué objeto cumple la acusación particular propuesta por la víctima dentro del proceso penal, frente a la garantía de reparación integral y sus diferentes mecanismos que debe asegurarse a las víctimas de infracciones.

CAPITULO II

METODOLOGIA

El trabajo de investigación es un proceso descriptivo, explicativo, creativo. Se aplicará la deducción, la inducción, el análisis, la síntesis y el método dialéctico, valiéndome de la lógica jurídica, por medio de conceptos, juicios y razonamientos. El trabajo recurrirá del nivel teórico al práctico; de lo abstracto a lo concreto, problematizado de acuerdo con el tema, la propuesta y los objetivos indicados a fin de dar soluciones al problema planteado, conforme el siguiente esquema:

2.1 Modalidades de la Investigación Jurídica.

Dogmática - documental.

La investigación dogmática-documental puede realizarse de forma independiente o como parte de las otras modalidades, que persigue conocer los antecedentes culturales o científicos del pasado, en la aplicación de la acusación particular en el derecho penal moderno con la vigencia del Código Orgánico Integral Penal en el Ecuador.

La información bibliográfica, así como la información documental válidos y confiables, son medios de información por excelencia y constituyen el primer paso de cualquier investigación.

Jurídico – sociológica.

La investigación en la ciencia jurídica que persigue un resultado, pero no logrado a través de la experimentación, sino de la interpretación de la ley. El Derecho como objeto de investigación debe estudiarse en acción, es decir a partir de la interrelación entre las normas con la realidad social o situación particular con la finalidad de investigar la aplicación de la acusación particular en el derecho penal con la entrada en vigencia del Código Orgánico Integral Penal en el Ecuador.

Inductivo.- La investigación parte de un problema específico para llegar a conocer el problema general, en el presente proyecto permite cumplir con los objetivos planteados, así como verificar si se cumple o no la propuesta formulada.

Se investigaron tres casos concretos en referencia a delitos de acción penal pública, en los que se presentaron acusación particular.

Deductivo.- Esto es lo contrario de la anterior, es partir la investigación de un problema general para terminar encontrando un problema específico.

Materialismo dialéctico.- Esto es que la investigación utiliza el TAS, esto que mediante la Tesis y la Antítesis, se puede llegar a una síntesis del problema, que consiste en establecer la irrelevancia de la acusación particular en la remediación de las víctimas de un delito de acción penal pública.

2.2. Tipos de Investigación Jurídica.

Histórico – Jurídico. Se refiere al seguimiento histórico de una institución jurídica.

Jurídico – Comparativo. Establece las semejanzas o diferencias entre instituciones jurídicas o sistemas jurídicos.

Jurídico – descriptivo. Consiste en descomponerlo en tantas partes como sean posibles a un tema jurídico.

2.3.-Técnicas e Instrumentos.

Técnicas de Investigación como: Análisis documental, Análisis de contenido, Fichaje, Resumen y síntesis.

Instrumentos: como Guía de análisis documental, Guía de análisis de contenido, Fichas.

2.4.- Plan para la Recolección de la Información.

- Recopilación de bibliografía especializada y actualizada sobre el tema.
- Elaboración de fichas.
- Organización de los Capítulos, Subcapítulos, temas, subtemas.
- Recopilación de documentos válidos y confiables.
- Indique en donde se va a recolectar la información.

2.5. Plan para el Procesamiento de la Información.

- Revisión crítica de la información recogida, es decir desechar la información defectuosa, contradictoria, incompleta, lo que no tenga relación con el tema.
- Análisis cualitativos con apoyo del marco teórico.
- Planteamiento de conclusiones y recomendaciones.

2.6. Recursos:

Institucionales: Tribunales de Garantías Penales.

Juzgados de Garantías Penales

Biblioteca de la Universidad Tecnológica Indoamérica

Humanos: Investigador

Especializados en la materia

Materiales: De escritorio

Tecnológicos

Bibliográficos

Económicos: Autofinanciado

2.7. Índice de cuadros

Cuadro N.1: Presupuesto

RUBROS DE GASTOS	VALOR
Personal de apoyo	200 USD
Derechos de grado	1419 USD
Material de escritorio	100 USD
Material bibliográfico	500 USD
Transporte	200 USD
Trascripción del informe	50 USD
Imprevistos	850 USD
TOTAL	3319 USD

Fuente: Personal

Elaborado Por: Carlos Javier Garcés Pérez

AÑO: 2016.

CAPITULO III

“FUNCIÓN DE LA ACUSACIÓN PARTICULAR EN EL PROCESO PENAL PREVISTO EN EL CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL FRENTE A LA VÍCTIMA COMO SUJETO PROCESAL.”

PROPUESTA

3.1. Evolución histórica de la Acción Penal.

“La acción penal es aquella que se origina a partir de un delito y que supone la imposición de un castigo al responsable de acuerdo a lo establecido por la ley. De esta manera, la acción penal es el punto de partida del proceso judicial.” Autores: Julián Pérez Porto y Ana Gardey. Publicado: 2009. Actualizado: 2009. Definicion.de: Definición de acción penal (<http://definicion.de/accion-penal/>)

En las instituciones romanas, la acción “era el derecho a perseguir en juicio aquello que se nos debe”, de esta afirmación se puede observar que tanto el proceso civil como el penal, formaban una sola disciplina.

Para Florian, E. la acción penal es el poder jurídico de excitar y promover la decisión del órgano jurisdiccional sobre determinada relación de derecho penal. La acción penal, domina y da carácter a todo el proceso: lo inicia y lo hace avanzar hasta su meta. La prohibición del ejercicio de la auto defensa en el Estado moderno determina la exigencia de dotar a los particulares y el Ministerio Público, en su caso, de la facultad (en los particulares) y del poder (en el Ministerio Público) que permita provocar la actividad de los órganos jurisdiccionales para la tutela del derecho; esta facultad o potestad es la acción o derecho de acción.

La acción es un derecho subjetivo público, derivado de los preceptos constitucionales que prohíben la auto defensa y que haciéndola innecesaria, crean órganos específicos encargados de ejercer la función jurisdiccional y establecen los lineamientos generales del proceso.

El derecho de acción entraña así, una doble facultad: la de provocar la actividad jurisdiccional, dando vida al proceso y la derivada de la constitución de éste, que permite a su titular la realización de los actos procesales inherentes a su posición en el mismo.

La acción ejercitada por el Ministerio Público (Fiscalía) en los casos en que la ley le impone esta actividad no puede considerarse como un derecho subjetivo público, sino como una función pública atribuida a los miembros de ésta Institución por considerarse de interés para la sociedad.

3.2. Antecedentes Históricos de la Acusación Privada.

En la antigüedad la persona que sufría un daño ejercitaba la acción penal. Era los tiempos de la venganza privada, cuando el hombre defendía por sí mismo sus derechos; en efecto en el ámbito de la justicia penal en los albores de la humanidad el hombre utilizaba la venganza privada. Existía la Ley del Talión que establecía que al agresor se le aplicara lo mismo que él había hecho al ofendido. Pero aparecieron problemas con respecto a ciertos delitos en los cuales no se podía aplicar la Ley del Talión, como aquellos cometidos en contra de la honestidad o los de lascivia. La Ley del Talión era la similitud de la venganza, a fin de que una persona sufra lo que le hizo a la otra.

En Grecia en el siglo XII A.C., Dracón optó por imponer la pena de muerte a todos los delitos. Hubo períodos donde se prescindió de la Ley del Talión, pero un siglo después Solón la volvió a restablecer.

En Roma se restableció la Ley del Talión pero con un sentido más jurídico: si alguno rompe un miembro a otro y no se arregla con él, hágase con él otro tanto; con esto la fórmula queda subordinada a la composición o arreglo de las partes.

El Talión representa limitaciones objetivas de la venganza, la primera mediante la proporción de castigo a la materialidad de la ofensa. La segunda limitación objetiva de la venganza era la composición. Esta es una indemnización que, como pena pecuniaria, está obligado a aceptar el ofendido.

“La víctima por el delito ha variado a lo largo de la evolución humana, esto es desde la víctima como animal de sacrificio, pasando por aquel hombre que podía vengarse libremente hasta el límite de la venganza privada en la ley del talión, llegando hasta el concepto de sujeto pasivo del delito y por ende desenvolviéndose dentro de un proceso penal en carácter de acusador particular o como coadyuvante del Ministerio Público, según sea el sistema que se analice” Ortíz, F. (2008) Ponencia La Acción Penal Privada en la Reforma Constitucional. Mexico (p.3).

3.3. Acusación particular.

Mediante esta figura los ciudadanos tuvieron en sus manos el ejercicio de la acción, no sólo el ofendido del delito, sino también los ciudadanos solicitaban a la autoridad la represión del ilícito. Como los delitos engendraban un mal en la sociedad, los ciudadanos fueran o no víctimas de aquellos eran los encargados de ejercitar la acción.

Esta figura nace en Roma. Se nombraba a un ciudadano para que llevara ante el Tribunal del pueblo la voz de la acusación. En Grecia existían los temosteti, cuyo deber era denunciar los delitos ante el senado. Durante la Edad Media, los señores feudales eran quienes ejercitaban dicha acción.

Se abandona la idea de que el ofendido del delito fuera el encargado de acusar y se ponía en manos de un ciudadano independiente el ejercicio de la acción, se reformaba así el procedimiento toda vez que un tercero ajeno a la víctima del delito era quien perseguía al responsable y procuraba su castigo.

3.4. Acusación Estatal.

La ejercen los órganos del Estado, mismos que practican la acción al cometerse el delito y el Estado es quien debe reprimirlo. El Estado ejerce la acción por medio del Ministerio Público.

3.5. Acción Civil y Acción Penal.

3.5.1 Acción Civil: Se instituye a cargo de la persona lesionada ya sea física o moral. El daño causado es moral y material. Puede operar el desistimiento, la transacción, el arbitraje, convenio extrajudicial, renuncia, caducidad.

3.5.2 Acción Penal: Está encomendada a un órgano del Estado. Su objetivo es legitimar a los órganos jurisdiccionales para que tengan conocimiento de un hecho delictuoso y en su caso se condene o se absuelva al inculcado, y en el primer caso dictar una pena o medida de seguridad, pérdida de los instrumentos del delito, etc. Poveda, C. (2008). Módulo de Derecho Procesal Penal. Universidad Tecnológica Indoamérica Ambato.

En la acción civil se refiere netamente al campo civil de ejercitar la demanda por el daño causado que puede ser moral en cuanto al ser interior de la víctima y material al pago del resarcimiento de los daños y perjuicios, en virtud de aquello si se llega a un arreglo puede darse por concluido el proceso a través de cualquiera de las figuras legales contempladas en materia civil.

La acción penal, en cambio tiene su titularidad al Estado a través de la Fiscalía General del Estado para que se investigue un determinado delito a fin de que luego del trámite correspondiente se emita una sentencia que puede ser

condenatoria o absolutoria, que si es condenatoria será la privación de la libertad, ordenar el pago de multa así como el de daños y perjuicios.

3.6.- Etimología del término Acusación.

La palabra “Acusar” viene del latín “*accusare*” y significa “atribuir un delito”. Sus componentes léxicos son: el prefijo: ad – (hacia) *causa* (causa) mas el sufijo – ar (usado para nombrar verbos). Buscador Google: www.dechile.net. (c) 2001-2016.

El Diccionario Jurídico Elemental-Practico y Pedagógico de la Distribuidora Jurídica Nacional (2001) trae la siguiente definición: “**Acusación.-** Escrito o discurso en que se imputa algún delito a alguien o así mismo. Acción de poner en conocimiento de un juez o de un organismo competente un crimen (real, supuesto o aparente) para que sea juzgado, reprimido. **Privada.-** Es la acción entablada en derecho procesal penal referente a un delito privado cuando el derecho de acusar incumbe a la persona ofendida o a sus parientes más allegados (dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad) o representante. En cuanto al objeto, se refiere a un delito de acción privada. Se lo presenta ante los jueces penales o ante los presidentes de la corte superior o suprema. Es el único modo de ejercer la acción penal privada. **Publica.-** Es la acción en derecho procesal penal, que corresponde cuando el derecho de acusar recae sobre alguno de los delitos perseguibles de oficio en los que intervienen el Ministerio Público, y se ejercita por el ministerio fiscal o por la víctima de la ofensa y aun por quien sea. **Falsa.-** Es imputar falsamente a alguna persona hechos que, si fueran ciertos constituirían delito o falta que dan lugar a ciertos procedimientos de oficio, ante un funcionario administrativo o judicial.” (p.24).

Al término **particular** lo define: “Lo propio o privativo de alguien o de algo por cuanto no es público ni menos oficial. Fuera de lo político.” (obra citada p. 303).

3.7.- Concepto de Acusación Particular.

“La acusación particular contiene la expresión de voluntad del ofendido de constituirse en parte principal del proceso penal para intervenir activamente en sus distintas etapas y, principalmente, aportar evidencias, indicios o elementos de prueba, intervenir en las diligencias que se cumplan e impulsar el trámite de la causa hasta llegar al Juicio, y reclamar la reparación integral y daños y perjuicios al responsable del delito.” Vaca, R. (2014) (p.484).

Zavala Baquerizo (1990) dice: “Es una declaración de conocimiento y/o de voluntad que nace del ofendido, o de sus parientes, o de una persona extraña a aquel, a través de una querrela, por la que se ejerce el derecho de constituirse en parte procesal activa para exhibir una pretensión y de resarcimiento de perjuicios

en un proceso que debe iniciarse o se ha iniciado ya por la comisión de una infracción pesquizable de oficio, dentro de los límites y condiciones impuestos por la ley”.

De estas definiciones que no tienen relación con el proceso ordinario previsto en el COIP se desprenden que la acusación particular ha dejado de ser el medio para poner en conocimiento del Juez penal la noticia criminis a fin de promover el ejercicio de la acción penal, de acuerdo al anterior Código de Procedimiento Penal y solicitar al Juez que dicte el auto cabeza de proceso. Ahora con la vigencia del Código Orgánico Integral Penal es la Fiscalía General del Estado quien tiene la titularidad de la acción penal, por tanto si la víctima pretende que se inicie un proceso penal tendrá que acudir con su denuncia ante el Fiscal, y si ya en la Instrucción desea constituirse en parte procesal deberá presentar su acusación particular en el momento adecuado.

De lo dicho deviene que la acusación particular es una manifestación de la voluntad del ciudadano agraviado por el delito, a fin de constituirse en parte procesal y conseguir que el órgano jurisdiccional imponga al o a los responsables las penas previstas en la ley penal sustantiva y al mismo tiempo se les condene al pago de las indemnizaciones civiles a que hubiere lugar como parte de la reparación integral a que se deriven por el delito cometido, es la acción con la cual uno pide al Juez que castigue el delito cometido por una o más personas.

Así, la acusación particular es una declaración de conocimiento y de voluntad, por medio de la cual, la persona facultada por la ley, pone en conocimiento del juez la perpetración de la infracción y se presenta como parte en el proceso penal, con el objeto de ejercer la pretensión penal y civil correspondiente.

A través de la acusación particular, el ofendido le presenta al juez su versión sobre la forma en que se cometió el ilícito. Pero el acusador particular no se limita a esa declaración de conocimiento de la infracción, sino que, fundamentalmente, exhibe una doble pretensión: La primera, de carácter penal, con el propósito de obtener que el órgano jurisdiccional correspondiente imponga al acusado las penas de privación de la libertad, las de carácter pecuniario y las accesorias previstas en la Ley. La segunda, de carácter civil, a fin de conseguir que el juez, en la misma sentencia, simultáneamente condene al acusado al pago de los daños y perjuicios derivados del ilícito, las costas judiciales y los honorarios profesionales del abogado que patrocine la acusación.

Con el anterior Código de Procedimiento Penal, la sentencia condenatoria ya contemplaba el que se debe condenar al acusado a pagar daños y perjuicios aun el ofendido no se haya presentado como acusador particular.

3.8.- Formas de Acusación Particular.

Haciendo un breve recuento de la figura legal de acusación particular, el Código de Procedimiento Penal de 1971, permitía a cualquier persona acusar las infracciones de acción pública, haya o no sido afectada con la infracción, con la única diferencia de que cuando se acusaba ofensa ajena era necesario rendir caución de temeridad, mientras que el ofendido, sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad y su cónyuge, no necesitaban rendir esa garantía a favor del acusado; mientras que el Código de 1983, limitaba esa facultad de acusar una infracción que no había ocasionado daño a los delitos cometidos en contra de los derechos consagrados en la Constitución Política de la Republica de 1998.

De acuerdo con el mismo Código de 1983, podían proponer la acusación particular únicamente el ofendido o su representante legal, o los parientes del ofendido dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o el cónyuge o el heredero que acusaba la muerte de su instituyente. El nuevo Código Orgánico Integral Penal, establece que el titular de la acusación particular es el ofendido, es decir la víctima del delito.

Para la Dra. Ana Isabel Garita, de ILANUD, respecto de la víctima dice: *“hablar de la víctima es hablar, precisamente, de quien fue “aniquilado” con el surgimiento del Derecho Penal estatal. El papel protagónico que desempeñará la víctima, en relación al control del delito, ha venido a menos por cuanto el derecho penal y el derecho procesal penal, han reducido su actuación, a aquellos casos de menor daño social en los que el interés público por perseguir es mínimo. Tampoco hay un verdadero interés en que el daño sea reparado a la víctima: la ventaja económica, cuando la hay, que percibe el delincuente, es objeto de comiso; la posibilidad de ejercer la acción civil (o de delegar su ejercicio al Mp), en sede penal para la reparación del daño causado por el delito, es irrelevante a los fines del proceso que, en definitiva, cierra las puertas o no da importancia a los procesos de “composición social del delito”, centrando su atención en la aplicación de medidas retribucionistas y represivas. No cabe duda, entonces, que el derecho penal y el derecho procesal penal parten de una base que desconoce y aleja a la víctima del delincuente. Este panorama encuentra su reflejo en la realidad jurídica y fáctica de los países, con la excepción de Panamá, para algunos delitos.”* Garita, A. (1991) El Ministerio Publico en América Latina.- Desde la perspectiva del Derecho Procesal Penal moderno. Ilanud. (p.111).

El viernes 28 de enero del 2014 la Asamblea Nacional del Ecuador aprobó en segundo y definitivo debate con 113 votos a favor de 123 legisladores presentes el Código Orgánico Integral Penal. Este nuevo Código reemplaza al anterior que

había sido promulgado hace más de 70 años, por lo que se necesitaba un cambio radical en materia penal.

El Código Orgánico Integral Penal tiene 730 artículos, 4 disposiciones generales, 26 disposiciones derogatorias y una disposición final. Está dividido en cuatro libros: Preliminar que trata sobre las normas rectoras; el Libro Primero que contiene la infracción penal; el Libro Segundo establece el Procedimiento; y, el Libro Tercero que regula la Ejecución, es decir que el mencionado Código abarca el Sustantivo, Adjetivo y Código de Ejecución de Penas, así como también contravenciones de Familia, Mujer y Familia, policía y de tránsito.

Entró en vigencia luego de 180 días (vacatio legis), después de la publicación en el Registro Oficial y se lo ha reformado el 30 de septiembre del 2015 publicado en el R.O. N° 598.1.

Esta normativa, dentro de las formas de acusación particular trae básicamente dos: la primera, acusación particular para los delitos de acción penal pública y la segunda, para los delitos de acción penal privada o querella.

Las características de la acción penal en lo que respecta a los delitos de acción penal pública son las de publicidad, oficialidad, indivisibilidad, irrenunciabilidad en tanto y en cuanto la obligación legal de ejercerla es el representante de la Fiscalía General del Estado.

3.9. Requisitos de la acusación particular.

Comparando entre el anterior Código de Procedimiento Penal y el actual Código Orgánico Integral Penal respecto de la acusación particular y sus requisitos se encuentra:

En el anterior, “Art. 55.- Contenido.- La acusación particular será escrita y debe contener: 1.- El nombre, apellido, dirección domiciliaria y numero de cedula de identidad del acusador si la hubiere obtenido; 2.- El nombre y apellido del acusado, y si fuere posible su domicilio; 3.- La determinación de la infracción acusada; 4.- La relación de las circunstancias de la infracción, con determinación del lugar, el día, mes y año en que fue cometida; 5.- La justificación de la condición de ofendido y los elementos en los que este funda la atribución de la participación del procesado en la infracción; y, 6.- La firma del acusador o de su apoderado con poder especial. En este poder se hará constar expresamente el nombre y apellido del acusado y la relación completa de la infracción que se quiere acusar. Si el acusador no supiere o no pudiere firmar, concurrirá personalmente ante la Jueza o Juez de Garantías Penales y en su presencia, estampara la huella digital. Todo acusador concurrirá personalmente ante la Jueza o Juez de Garantías Penales para reconocer su acusación. El Secretario dejara constancia de este acto procesal.”

En el actual Código: “Art. 434.- Contenido.- La acusación particular se presentará por escrito y contendrá: 1. El nombre, apellido, dirección domiciliaria o casillero judicial o electrónico número de cédula de ciudadanía o identidad o número de pasaporte de la persona que la presenta. 2.- El nombre y apellido o identificación que individualice a la persona procesada y si es posible su dirección domiciliaria. 3.- La justificación de encontrarse en condición de víctima. 4. La relación de los hechos, con determinación del lugar, día, mes y año en que es cometido así como la infracción acusada. 5.- La firma de la persona que acusa o de su apoderada con poder especial. En este poder se hará constar expresamente el nombre y apellido de la persona procesada o acusada y la relación completa de la infracción que se quiere acusar. 6. Si la o el acusador no sabe o no puede firmar, deberá estampar la huella digital en presencia de una o un testigo.”

De los indicados artículos se desprenden que no existe una diferencia sustancial entre los requisitos de la acusación particular pese al avance que en materia de derechos a favor de la víctima se han efectuado y que como postulados generales se encuentran en la Constitución de la República del Ecuador.

3.10.- Quienes pueden presentar acusación particular.-

La Acusación Particular que se encuentra en el Libro Segundo Título II Capítulo Cuarto Arts. 432 al 438 incluso del Código Orgánico Integral Penal establece: “Podrá presentar acusación particular:

1. La víctima, por sí misma o a través de su representante legal, sin perjuicio de la facultad de intervenir en todas las audiencias y de reclamar su derecho a la reparación integral, incluso cuando no presente acusación particular.
2. La víctima, como persona jurídica podrá acusar por medio de su representante legal, quien podrá actuar por sí mismo o mediante procuradora o procurador judicial.
3. La víctima como entidad u organismo público, podrá acusar por medio de sus representantes legales o de sus delegados especiales y la o el Procurador General del Estado, para las instituciones que carezcan de personería jurídica, sin perjuicio de la intervención de la Procuraduría General del Estado. En la delegación especial deberá constar expresamente el nombre y apellido de la persona procesada y acusada y la relación completa de la infracción con la que se le quiere acusar.”

Se considera a la víctima como sujeto activo de la relación procesal penal, así el Art. 441 del COIP señala a quienes se considera víctimas: “Se consideran víctimas para efectos de aplicación de las normas de este Código, a las siguientes personas:

1. Las personas naturales o jurídicas y demás sujetos de derechos que individual o colectivamente han sufrido algún daño a un bien jurídico de manera directa o indirecta como consecuencia de la infracción.
2. Quien ha sufrido agresión física, psicológica, sexual o cualquier tipo de daño o perjuicio de sus derechos por el cometimiento de una infracción penal.
3. La o el cónyuge o pareja en unión libre, incluso en parejas del mismo sexo; ascendientes o descendientes dentro del segundo grado de consanguinidad o primero de afinidad de las personas señaladas en el numeral anterior.
4. Quienes compartan el hogar de la persona agresora o agredida, en casos de delitos contra la integridad sexual y reproductiva, integridad personal o de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar.
5. La o el socio o accionista de una compañía legalmente constituida que haya sido afectada por infracciones cometidas por sus administradoras o administradores.
6. El Estado y las personas jurídicas del sector público o privado que resulten afectadas por una infracción.
7. Cualquier persona que tenga interés directo en caso de aquellas infracciones que afecten intereses colectivos o difusos.
8. Las comunidades, pueblos, nacionalidades y comunas indígenas en aquellas infracciones que afecten colectivamente a los miembros del grupo. La condición de víctima es independiente a que se identifique, aprehenda, enjuicie, sancione o condone al responsable de la infracción o a que exista un vínculo familiar con este.” (Código Orgánico Integral Penal, 2014, Art. 441).

En éste punto, debería darse un orden de preferencia en cuanto a la posibilidad de ejercer el derecho por parte del cónyuge o los parientes más próximos a la víctima, con la finalidad de evitar en lo posible que alguien se presente como acusador particular y luego llegue a un arreglo económico con el acusado para posteriormente desistir lo que puede ir en detrimento del cónyuge sobreviviente o de los otros parientes que pueden tener igual o mayor derecho que el acusador que primero fue hacia el Juez penal con la acusación.

El Dr. Ricardo Vaca Andrade (2014) en la obra Derecho Procesal Penal Ecuatoriano, indica que está a favor de la intervención procesal del ofendido y que para ello tiene los siguientes fundamentos:

- “Psicológico, puesto que se trata de encausar jurídicamente los sentimientos negativos que, como reacción natural, surgen en la mayoría de las personas que han sufrido las consecuencias de una conducta delictiva que les ha causado

daño, a veces irreparable. Así, quien ha sido injusta y violentamente herido, o sufre la brutal agresión de un asesino o violador no puede menos que sentir odio, desprecio, repugnancia y deseos de vengarse causando al sujeto activo de tal delito un daño o igual o mayor que el que la víctima del delito ha sufrido. Si pese a la actuación oficial del Estado y sus organismos esos sentimientos negativos permanecen en la víctima, quiere el legislador que sean debidamente canalizados, ordenados y dirigidos permitiendo la participación de la víctima del delito o sus familiares, en el proceso penal.

- Práctico, en cuanto la intervención del ofendido puede facilitar en gran medida la completa investigación y comprobación de los hechos que son materia del proceso penal pues él, habiendo sufrido directamente las consecuencias del delito, puede aportar toda la información que requieren los organismos policiales y de juzgamiento para llegar al descubrimiento de la verdad histórica. Con su versión y aporte probatorio, que aunque interesados deberán confiarse que son verídicos, las actuaciones que se cumplan respondiente a su petición, o las pruebas que en su momento se incorporen al proceso, se completará el panorama informativo indispensable para que el órgano jurisdiccional decida apropiadamente en derecho.
- Jurídico, para hacer viable la doble pretensión del ofendido o víctima: de un lado, la de que se imponga a los responsables las penas previstas en la ley; y, de otro lado, la de poder reclamar de mejor manera la reparación integral, incluidos los daños y perjuicios ocasionados y que ha sufrido a consecuencia del delito, aunque en el actual COIP ya no es requisito indispensable que el ofendido presente su acusación particular en el proceso penal para reclamar expresamente daños y perjuicios, ya que el numeral 6° del Art. 622 del COIP dispone que en la sentencia, el Juzgador, juez o tribunal, de oficio, deben disponer “la condena a reparar integralmente los daños ocasionados por la infracción con la determinación del monto económico que pagará la persona sentenciada a la víctima y demás mecanismos para la reparación integral”. Sin embargo, pese a la existencia de este deber de los juzgadores, es necesario que la víctima aporte con pruebas que le permitan demostrar la existencia de los daños y el monto económico que debe fijar el juez o tribunal, así como los demás mecanismos de reparación, porque además, así lo exige la misma norma, esto es pruebas debidamente actuadas que fundamenten la decisión.”

Para el mencionado autor el objeto primordial de la acusación particular es en cuanto tiene que ver a la declaración de voluntad de ser parte procesal, “...*que ser legalmente considerado como parte principal implica para la víctima el reconocimiento de un derecho fundamental, cual es el que tienen todos los sujetos principales para intervenir en el proceso penal dentro de la etapa de la*

Instrucción y a partir de entonces alcanzar las metas que se ha propuesto: ayudar al fiscal y a los integrantes del Sistema especializado integral de investigación, de medicina legal y ciencias forenses en su tarea de buscar elementos de convicción respecto a la existencia del delito y posible responsabilidad de los procesados...”

Según las disposiciones del anterior CPP, el ofendido, era admitido al proceso como parte principal y por tanto tenía derecho a reclamar dentro del mismo proceso penal la indemnización de daños y perjuicios ocasionados por el delito, aunque como decía la misma norma, la condena en lo penal es independiente de la condena al pago de la indemnización de daños y perjuicios, y una vez declarada en sentencia firme debía ser liquidada en juicio verbal sumario.

3.11. Procedimiento en ejercicio público de la acusación particular.

El Art. 589 del COIP expresa: “El procedimiento ordinario se desarrolla en las siguientes etapas: 1. Instrucción; 2. Evaluación y preparatoria de juicio; 3. Juicio”, sin embargo dentro del mismo proceso existen otras diligencias o actuaciones oficiales que incorporadas al expediente llegan a formar parte de la investigación, que antes se la conocía como “indagación previa”, que no era precisamente una etapa del proceso pero que servía para recopilar información acerca del delito perpetrado previo a iniciar con la instrucción fiscal propiamente dicha, como lo señala el Art. 580 ibidem: Fase de Investigación Previa.- Finalidades.- En la fase de investigación previa se reunirán los elementos de convicción, de cargo y de descargo, que permitan a la fiscal o al fiscal decidir si formula o no la imputación y de hacerlo, posibilitara al investigado preparar su defensa...” (Código Orgánico Integral Penal pp. 157 y 155).

Por tanto, las etapas del proceso penal son actualmente:

- a) **La instrucción**, en la que deben practicarse las diligencias que tienen por finalidad establecer la existencia de una acción u omisión punible, las circunstancias en que se hubiere cometido y la responsabilidad o no de las personas involucradas.

Se inicia con la audiencia de formulación de cargos convocada por la o el juzgador a petición de la o el fiscal, cuando la o el fiscal cuente con los elementos suficientes para deducir una imputación, en esta audiencia la o el fiscal determinara el tiempo de duración de la instrucción misma que no podrá exceder del plazo máximo de noventa días;

- b) **Evaluación y preparatoria de juicio**, tiene como finalidad conocer y resolver sobre cuestiones de procedibilidad, prejudicialidad, competencia y procedimiento establecer la validez procesal, valorar y evaluar los elementos de convicción en que se sustenta la acusación fiscal, excluir los

elementos de convicción que son ilegales, delimitar los temas por debatirse en el juicio oral, anunciar las pruebas que serán practicadas en la audiencia de juicio y aprobar los acuerdos probatorios a que llegan las partes;

- c) **Etapas de Juicio**, el juicio es la etapa principal del proceso. Se sustancia sobre la base de la acusación fiscal. Los principios en esta etapa son: oralidad, publicidad, inmediación y contradicción en la actuación probatoria.

En su desarrollo se observaran los principios de continuidad del juzgamiento, concentración de los actos del juicio, identidad física de la o el juzgador y presencia obligatoria de la persona procesada y de la o el defensor público o privado, con las salvedades del juzgamiento en ausencia previstas en la Constitución.

En otras palabras es en esta etapa en la que se ha de desarrollar la prueba ya que esta es de juzgamiento, acorde con el precepto constitucional de contradecir la prueba, de que las partes procesales las puedan discutir y conforme además al principio de legalidad establecido en el Art. 454 del COIP esto es Oportunidad, Inmediación, Contradicción, Libertad probatoria, Pertinencia, Exclusión, Principio de igualdad de oportunidades para la prueba.

En los delitos de acción pública, la víctima en los términos del Art. 432 del COIP puede presentarse ante el Juez penal luego de que se le ha notificado con el inicio de la Instrucción hasta antes de su conclusión; y, una vez admitida su acusación, intervenir en el proceso penal en calidad de sujeto principal, con el mismo derecho que tienen las otras partes, con la finalidad de impulsarlo hasta conseguir que se hagan efectivas las acciones punitivas y resarcitorias a que hubiere lugar, este mecanismo para formar parte del proceso penal es la Acusación Particular.

En cambio, en los delitos de acción privada en los que los responsables solo pueden ser sancionados tomando como punto de partida la decisión personal de la víctima, el medio de ejercer la acción penal es la Acusación Privada, en estos delitos de acción penal privada o querrela queda reservado en forma privativa a la víctima, el presentar o no su acusación, no existe ningún organismo que intervenga para el impulso del trámite, éste a su vez se sujeta a las disposiciones constantes en los Arts. 647 y siguientes del Código Orgánico Integral Penal, no existen etapas procesales como en el trámite de acción penal pública, se puede conciliar y poner fin al proceso, el Fiscal no tiene participación alguna, en la carga de la prueba son distintas a las que se observan en el trámite ordinario, estos delitos sólo pueden presentarse ante los jueces penales pero no ante la Policía ni ante el Fiscal, el Juez penal que dicta la sentencia una vez concluido el trámite con

la audiencia de juzgamiento termina su intervención sin que el expediente llegue al Tribunal Penal que en el trámite ordinario conoce la etapa del Juicio, juzga y dicta sentencia, es más bien un juicio que tiene similitud o características parecidas a las de un juicio civil, en el que cabe un acuerdo reparatorio, el desistimiento, la transacción, etc; con el anterior Código de Procedimiento Penal había la posibilidad de nombrar un amigable componedor que realice mediación entre los sujetos procesales para llegar a una conciliación que ponga fin al proceso.

3.11. Procedimiento para el ejercicio privado de la acción penal.

Las reglas referentes al ejercicio privado de la acción penal se encuentran establecidas en el Art. 647 del COIP así:

1. Quien acuse por un delito de ejercicio privado de la acción penal, deberá proponer la querella por si o mediante apoderada o apoderado especial ante la o el Juez de Garantías Penales.
2. La querella se presentara por escrito y contendrá:
 - a) Nombres, apellidos, dirección domiciliaria y número de cédula de ciudadanía o identidad o pasaporte de la o el querellante.
 - b) El nombre y apellido de la o el querellado y si es posible, su dirección domiciliaria.
 - c) La determinación de la infracción de que se le acusa.
 - d) La relación circunstanciada de la infracción, con determinación del lugar y la fecha en que se cometió.
 - e) La protesta de formalizar la querella.
 - f) La firma de la o el querellante o de su apoderada o apoderado con poder especial el cual deberá acompañarse. El poder contendrá la designación precisa de la o el querellado y la relación completa de la infracción que se quiere querellar.
 - g) Si la o el querellante no sabe o no puede firmar, concurrirá personalmente ante la o el juzgador y en su presencia estampa su huella digital
3. La o el querellante concurrirá personalmente ante la o el juzgador, para reconocer su querella.
4. En los procesos que trata esta sección no se ordenaran medidas cautelares y podrán concluir por abandono, desistimiento, remisión o cualquier otra forma permitida por este Código.

Se califica la acusación y se procede a la citación con la misma al querellado quien la contestara en un plazo de diez días, con la contestación la o el juzgador concederá un plazo de seis días para que las partes presenten y soliciten prueba

documental, soliciten peritajes y anuncien los testigos que deberán comparecer en la audiencia.

Posteriormente se señalará día y hora para la audiencia final en la que el querellante y querellado podrán llegar a una conciliación, este acuerdo se pondrá en conocimiento del juzgador para que ponga fin al proceso.

Si no se llega a la conciliación se continua con la audiencia en la que el querellante formalizara su acusación, la o el defensor público o privado presentara los testigos y peritos previamente anunciados, quienes contestaran al interrogatorio y contrainterrogatorio.

Para ejemplificar entre los delitos de acción penal publica y los delitos de acción penal privada tenemos para los primeros entre otros los delitos contra la inviolabilidad de la vida, el asesinato, el femicidio, el sicariato, homicidio, homicidio culposo, aborto con muerte, delitos contra la integridad personal; la tortura, abandono de personas, intimidación; el enriquecimiento ilícito, el cohecho, la concusión, la extorsión, pánico económico, los delitos contra los derechos de libertad, delitos contra la integridad personal, delitos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, delitos contra la libertad personal, entre ellos las lesiones, cuando se dan estas lesiones en contra de la mujer o miembros del núcleo familiar y que no pasen de tres días de incapacidad se convierten en contravenciones; y, para los segundos en forma expresa el Art. 415 del COIP establece los siguientes delitos: 1. Calumnia. 2. Usurpación. 3 Estupro y 4. Lesiones que generen incapacidad o enfermedad de hasta treinta días, con excepciones de los casos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar.

3.12.- Consecuencias jurídicas de la Acusación Particular.

La denuncia o acusación particular pueden ser calificadas de temerarias o maliciosas, tanto en los delitos de acción penal publica en el momento de dictarse el auto de sobreseimiento o sentencia, así como en los delitos de acción penal privada, por tanto el que obtuvo a su favor el desistimiento puede ejercer contra el denunciante o acusador las acciones respectivas, y además aunque la norma no lo dice puede presentar acción civil por daño moral.

En los delitos de acción privada como se dijo también se califica a la acusación, inclusive es obligación de la o el juzgador de calificar en su oportunidad si la querrela ha sido maliciosa o temeraria.

Las palabras jurídicas malicia y temeridad, según el Diccionario Jurídico en su página 255 significan, en su orden: “Predisposición de quien litiga a sabiendas de su falta de razón o asumiendo actitudes procesales conducentes a entorpecer la marcha del litigio. **Procesal.** Trámite judicial donde surge la violación consciente

de la buena fe requerida por las circunstancias del proceso, y con intención de causar daño. **Temeraria.** Mala intención en la ejecución del proceso que por su evidencia y gravedad implica un desprecio grave de parte de quien la practica, en relación a las reglas de la buena fe procesal.”

Por tanto la malicia se refiere a la mala fe que puede tener el acusador o denunciante a sabiendas de que no tiene fundamento para presentar e iniciar un juicio lo hace sin medir las consecuencias jurídicas que le pueden acarrear; mientras que la temeridad es el actuar con imprudencia, exposición excesiva a un riesgo innecesario.

3.13.- La Reparación Integral.

Para la tratadista Silva Sánchez (2001) en cuanto al derecho a la reparación integral, dice: “...En los países en los que existe un sistema de “action civile” cabe la posibilidad de que la sentencia judicial que pone fin al proceso penal no sólo se pronuncie sobre la pretensión punitiva del Estado, sino también sobre pretensiones de contenido patrimonial que guardan una determinada relación con el delito enjuiciado. En otros términos, los convencionales, los jueces y tribunales penales pueden decidir no sólo sobre la responsabilidad penal del inculpado, sino también sobre la responsabilidad civil derivada del delito; entonces para éste autor la responsabilidad civil derivada del delito y su resolución en el proceso penal no es porque sea por cuestiones de Derecho Penal o de Política Criminal, sino tendiente a evitar el peregrinaje de jurisdicciones, por lo que debe entenderse como un caso de responsabilidad extracontractual, respecto del cual se podría discutir si se ciñe al daño propio del delito tal como éste bien tipificado en las leyes penales o también a otros daños derivados de la conducta delictiva o extra típica. La responsabilidad civil derivada del delito no funciona, pero por economía procesal justifica se resuelva sobre este tema. La condena a reparar el daño causado por el delito no requiere que el daño causado sea elemento típico del delito, ni siquiera que se condene por delito alguno.” Sánchez. S. Int Detr; ¿ex delito? Aspectos de la llamada “Responsabilidad Civil”, en el proceso penal. Universitat Pompeu Fabra; Barcelona. Julio de 2001 (p. 1).

Por su parte la Dra. Blanca Alicia León Pacheco (2012), en su trabajo investigativo de Tesina de Especialista, por la Universidad de Cuenca, denominado “La indemnización de daños y perjuicios en la sentencia penal”, respecto a las indemnizaciones, haciendo alusión al Art. 309 numeral 5 del anterior Código de Procedimiento Penal manifiesta: “...con una sola interpretación literal: el juez en la sentencia manda a pagar la indemnización de los daños fijando el monto. Pero analizando el contexto general de las leyes penales en nuestro país, no es tan cierto ni así de simple lo que establece el referido artículo, manifiesta que esta disposición deja mucho que desear al fijar el

monto de las indemnizaciones en la sentencia penal condenatoria, por el contrario puede ser un gran avance en el tema de las indemnizaciones, porque no se requiere ni acusación particular, ni demandar vía civil que equivale que en la misma sentencia que declara la responsabilidad del procesado y se fija el monto de las indemnizaciones para la víctima.” (p. 26).

La responsabilidad civil derivada del delito es en forma efectiva la indemnización de daños y perjuicios, según lo cual la sentencia debe contener la restitución, la reparación del bien jurídico mediante una indemnización de los daños. Si bien el numeral 6 del Art. 622 íbidem establece que la condena debe reparar integralmente los daños ocasionados por la infracción con la determinación del monto económico que pagará la persona sentenciada a la víctima y demás mecanismos necesarios para la reparación integral, como un requisito de la sentencia, éste postulado no se lo debe tomar como algo simple sino que debe ser considerado en su forma real y verdadera, por tanto éste requisito debe satisfacer a través del monto que se fije la reparación total del daño causado, en el que se debe incluir el lucro cesante y el daño emergente; puesto que con éste artículo los jueces penales y los Tribunales penales del Ecuador no sólo deben establecer en sus sentencias la restitución sino que también lo deben hacer con la indemnización de daños y perjuicios y en base a esto va quedando en el olvido la discusión de que la víctima tiene que presentar acusación particular o una acción civil de resarcimiento e indemnización de daños y perjuicios por cuanto con la disposición antes enunciada ya no es necesario que para resarcir los daños y perjuicios a la víctima tenga que reclamarlo. Consecuentemente, con aquello el Estado a través de los órganos de justicia, Jueces, Tribunales Penales, están obligados a velar por los intereses de la víctima, ya que no se le impone a ésta por separado o dentro del mismo juicio penal a que lo reclame, contra el culpable del delito, sino que al ser considerado como un derecho y requisito de la sentencia es imperativo para el Estado ejecutarla.

La Dra. Ledy Zúñiga Rocha en la presentación del Código Orgánico Integral Penal dice: “El derecho penal regula el ejercicio punitivo y preventivo del Estado, cuya finalidad no es únicamente la tipificación de conductas que lesionan bienes jurídicos, sino que contiene y reduce el poder punitivo garantizando la hegemonía de un Estado constitucional de derechos y justicia.”, Zúñiga, L. (2014). Serie Justicia y Derechos Humanos Neoconstitucionalismo y Sociedad Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos Subsecretaría de Desarrollo Normativo (p.5), que a su vez se hace eco de los postulados y principios constitucionales del derecho al debido proceso, a la no revictimización del ofendido.

La Corte Constitucional del Ecuador en la sentencia N° 004-13-SAN-CC Caso N°0015-10-AN, respecto al derecho de la reparación integral ha manifestado: *“Conforme al mandato constitucional ecuatoriano, toda vulneración de derechos*

*merece una reparación integral debido a que en el Ecuador, Estado constitucional de derechos y justicia, la expectativa de respeto a los derechos constitucionales es mayor a partir del cambio de paradigma constitucional; por lo tanto, se espera que la reparación de los daños causados consiga un sentido integral en función a la naturaleza interdependiente de los derechos constitucionales (artículo 11 numeral 6 de la Constitución). En este contexto, la reparación integral en el ordenamiento ecuatoriano constituye un verdadero derecho constitucional, cuyo titular es toda persona que se considere afectada por la vulneración de sus derechos reconocidos en la Constitución. Adicionalmente, es un principio orientador que complementa y perfecciona la garantía de derechos; así, esta institución jurídica se halla inmersa en todo el ordenamiento constitucional ecuatoriano, siendo transversal al ejercicio de los derechos, así por ejemplo, la obligatoriedad de la reparación para las víctimas de delitos penales (artículo 78); para los consumidores y consumidoras que sufran engaños comerciales (artículo 52); la posibilidad de demandar una reparación como consecuencia de las afectaciones por racismo o xenofobia contra comunidades o poblaciones indígenas (artículo 57) y por afectaciones ambientales que puedan atentar contra los ecosistemas (artículo 397), entre otras. En materia específica de garantías jurisdiccionales se impone el deber judicial de la aplicación obligatoria de la reparación integral ante toda vulneración de derechos, pues " ... Los procesos judiciales sólo finalizarán con la ejecución integral de la sentencia o resolución" (artículo 86 numeral 3 segundo inciso), de Corte Constitucional del Ecuador lo que se deduce que las decisiones que resuelvan las acciones planteadas en protección de los derechos constitucionales, que declaren la vulneración de un derecho, deben necesariamente contener la disposición de reparación integral en la parte resolutive de la decisión constitucional. Ahora bien, dentro del derecho constitucional procesal ecuatoriano, el legislador introdujo una fórmula para establecer la compensación económica que se genere a partir de la declaratoria de vulneración de un derecho como consecuencia de la reparación integral; así, el artículo 19 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional determina: **Art. 19.- Reparación económica.-** Cuando parte de la reparación, por cualquier motivo, implique pago en dinero al afectado o titular del derecho violado, la determinación del monto se tramitará en juicio verbal sumario ante la misma jueza o juez, si fuere contra un particular; y en juicio contencioso administrativo si fuere contra el Estado. De estos juicios se podrán interponer los recursos de apelación, casación y demás recursos contemplados en los códigos de procedimiento pertinentes. La norma es clara al determinar que todo tipo de reparación económica, cuando tenga que satisfacerlo un particular, la determinación del monto se tramitará vía juicio verbal sumario ante la misma jueza o juez; mas cuando la debe compensar el Estado, la cuantificación deberá realizarse vía contencioso administrativo. Si bien podría pensarse que esta*

regulación restringe el derecho a la reparación integral, debe interpretársela a la luz de la lógica de las garantías jurisdiccionales dentro del Estado Constitucional de derechos y justicia. En efecto, lo que propende la norma es controlar los excesos en los que el juez constitucional puede incurrir al determinar los montos concernientes a la reparación económica y tutelar de los derechos constitucionales de la contraparte, para que esta pueda ejercerlos dentro del marco del debido proceso. Empero esta Corte deja en claro que la determinación del monto de la reparación económica, consecuencia de la declaración de una vulneración de derechos, no generará un nuevo proceso de conocimiento, sino exclusivamente una cuantificación dentro de un trámite de ejecución de la sentencia constitucional, pues de lo contrario, la ejecución de las decisiones constitucionales quedarían a la expensa de que estas se ratifiquen en un nuevo proceso en la justicia ordinaria que declare la vulneración del derecho. En efecto, el proceso de cuantificación de reparación económica no es un proceso en el que se debatirá nuevamente las situaciones acerca de los hechos que dieron lugar a la declaración de la vulneración del derecho y si esta se verificó o no, sino que se limita a ser un procedimiento de puro derecho en el que se cuantifique la reparación económica. El fundamento que la Corte considere al procedimiento de cuantificación de la reparación económica como de ejecución y no de conocimiento, lo hace en analogía a lo determinado por la Corte Nacional de Justicia a través de los fallos de triple reiteración emitidos por la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia, fuente dinámica del derecho que acopla la normativa a la realidad, en donde se ha manifestado, respecto a la operatividad del silencio administrativo positivo, que cuando se haya producido dicho silencio administrativo se ha de entender que se genera un efecto práctico de la garantía del derecho de petición y oportuna respuesta, sin que ello implique que se vuelva a conocer el fondo del asunto, puesto que el silencio administrativo ha generado un derecho favorable al accionante, dando origen a un accionar procesal autónomo: Así: “Mediante el silencio administrativo positivo, se da un efecto práctico a la garantía o derecho de petición y oportuna respuesta, como se halla consagrado en la Constitución Política del Estado. Por ello, el efecto positivo del silencio administrativo, no es una presunción de hecho que admite prueba en contrario, sino una presunción de derecho que da origen a un accionar procesal autónomo”² “... debiendo añadir que la acción a proponer para hacer efectivo el derecho obtenido como efecto del silencio administrativo será una acción de puro derecho, en la que en consecuencia no cabe la apertura de un término de prueba ya que ésta tiene como únicos y exclusivos propósitos establecer que el petitorio aprobado por el silencio administrativo se dirigió a la autoridad que tenía la competencia para resolverlo y que lo así aprobado no habría estado afectado por nulidad absoluta de haber sido aprobado por la autoridad a la que se dirigió la petición o reclamo”³. 2 Corte Suprema de Justicia del Ecuador, fallos de triple reiteración, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Res. No. 321-97 4208; No. 168-98 Res. No. 195-99 4209; No. 169-98 Res. No. 217-99 4211. 3 Gaceta Judicial. Año CV. Serie XVII. No. 14. Página 4796, Quito, 28 de octubre de 2003. Por tanto, al igual que ocurre en la ejecución de un acto administrativo cuando ha operado el silencio administrativo; a través de una sentencia constitucional se reconoce un derecho que ha sido objeto de vulneración y frente a aquello se genera una obligación patrimonial por parte de una persona o autoridad obligada, armonizando la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional con la Constitución de la República y atendiendo la naturaleza sencilla, rápida y eficaz de las garantías jurisdiccionales, la cuantificación económica que se haga tanto en el ámbito civil como en el contencioso administrativo debe guardar respeto a estos principios elementales de la justicia constitucional. Por tanto, se debe cuantificar el monto por parte de la jurisdicción civil o contencioso administrativa, según el caso, sin que ello implique un nuevo conocimiento acerca del fondo del asunto, sino más bien un trámite que determina un monto económico dentro de la fase de ejecución de la sentencia constitucional, el mismo que debe ser ágil, para lo cual se debe emplear todos los medios necesarios para el cumplimiento del principio de celeridad en materia constitucional. En razón de lo analizado, la Corte Constitucional, al ser el intérprete final y auténtico de la Constitución, en ejercicio del artículo 436 numerales 1 y 6 de la Constitución, establece como regla interpretativa que: El monto de la reparación económica, parte de la reparación integral, como consecuencia de la declaración de la vulneración de un derecho reconocido en la Constitución, se la determinará en la jurisdicción contenciosa administrativa cuando la deba satisfacer el Estado y en la vía verbal sumaria cuando deba hacerlo un particular. Dicho procedimiento se constituye en un proceso de ejecución, en el que no se discutirá sobre la declaratoria de vulneración de derechos. En el caso sub judice, dada la naturaleza de la entidad demandada, Ministerio de Relaciones Exteriores, y al haber encontrado la Corte vulneración de derechos constitucionales, en la especie, la seguridad jurídica, que deber ser resarcida mediante una reparación integral, se debe proceder a la cuantificación económica por la jurisdicción contenciosa administrativa dentro de un término razonable, luego de lo cual se deberá informar a esta Corte.” Corte Constitucional del Ecuador. (2013) (pp.14-27)

En la sentencia 135-14-SEP-CC Caso N°1758-11-EP, de Acción Extraordinaria de Protección, la Corte Constitucional ha expuesto: “La concepción de reparación integral, introducida a partir de la Constitución de 2008, va más allá de la forma tradicional en la que se entendía a la remediación de los daños ocasionados por la vulneración de derechos constitucionales, es así, que bajo esta figura, se busca alcanzar una reparación de orden material e inmaterial. Este concepto, es considerado incluso como un verdadero derecho constitucional, acorde a lo manifestado previamente por esta Corte en la

sentencia N.º 004-13-SAN-CC5, siguiendo la línea jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que tiene como fundamento el artículo 63 numeral 1 de la Convención Americana sobre Derecho Humanos. A través de la reparación integral, se pretende lograr un resarcimiento de los daños causados en un sentido amplio y garantizar una protección más efectiva de los derechos constitucionales, para lo cual el artículo 18 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional prevé varias formas de reparación: la restitución del derecho, la compensación económica, la rehabilitación, la satisfacción, las garantías de que el hecho no se repita, las medidas de reconocimiento, entre otras. La reparación económica, como una medida de orden material del derecho a la reparación integral, es desarrollada por el artículo 19 ibídem, que al respecto indica que cuando haya lugar al pago de dinero como mecanismo de reparación de los derechos vulnerados, la determinación del monto que corresponda se deberá tramitar en juicio verbal sumario cuando se trate de particulares o en juicio contencioso administrativo cuando fuere contra el Estado. ⁵ En este contexto, la reparación integral en el ordenamiento ecuatoriano constituye un verdadero derecho constitucional, cuyo titular es toda persona que se considere afectada por la vulneración de sus derechos reconocidos en la Constitución. Adicionalmente, es un principio orientador que complementa y perfecciona la garantía de derechos; así, esta institución jurídica se halla inmersa en todo el ordenamiento constitucional ecuatoriano, siendo transversal al ejercicio de los derechos (...) ⁶ Artículo 63- 1. Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá así mismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada. www.corteconstitucional.gob.ee Caso N.º 1758-11-EP Página 14 de 16 Al referirse a la reparación económica, la Corte Constitucional en la sentencia N.º 004-13-SAN-CC, dentro del caso N.º 0015-10-AN, en ejercicio de la competencia establecida en el artículo 436 numerales 1 y 6 de la Constitución de la República del Ecuador, emitió como regla jurisprudencial la siguiente: "El monto de la reparación económica, parte de la reparación integral, como consecuencia de la declaración de la vulneración de un derecho reconocido en la Constitución, se la determinará en la jurisdicción contenciosa administrativa cuando la deba satisfacer el Estado y en la vía verbal sumaria cuando deba hacerlo un particular. Dicho procedimiento se constituye en un proceso de ejecución, en el que no se discutirá sobre la declaratoria de vulneración de derechos". (El resaltado pertenece a esta corte). De esta forma, es claro que en los procesos de garantías jurisdiccionales cuando proceda la reparación económica, la jueza o juez en la sentencia que declare la vulneración de derechos constitucionales deberá simultáneamente ordenar el inicio del proceso en la vía que corresponda, para que se determine el monto de indemnización pecuniaria a favor del afectado o titular del derecho vulnerado. No obstante, los procesos que se inicien para la determinación del monto de reparación económica, no deben ser entendidos como nuevos procesos de conocimiento respecto a la vulneración de derechos. De acuerdo a la sentencia antes referida, el juicio verbal sumario o contencioso administrativo, constituirá un procedimiento tendiente únicamente a

la cuantificación de la reparación económica, el cual permitirá la plena ejecución de la sentencia constitucional. De acuerdo a lo indicado por el accionante, las disposiciones a las que se ha hecho referencia en los párrafos anteriores han sido inobservadas por los jueces de la Sala Única de la Corte Provincial de Justicia de Esmeraldas, al ordenar de forma directa que la entidad demandada como medida de reparación integral proceda a cancelar las remuneraciones dejadas de percibir por la trabajadora. Bajo este contexto, esta Corte considera que los jueces de la Sala Única de la Corte Provincial de Justicia de Esmeraldas al haber omitido ordenar que la reparación económica correspondiente sea determinada en la vía contencioso administrativa, al tratarse de una entidad del Estado la llamada a compensar la indemnización pecuniaria; ha vulnerado el derecho al debido proceso, en la garantía de cumplimiento de las normas, debido a la inobservancia de lo dispuesto en los artículo 17 numeral 4 y 19 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, normas que establecen el procedimiento a seguir para hacer efectivo el derecho a la reparación integral consagrado en el artículo 86 numeral 3 de la Constitución de la República.” Corte Constitucional del Ecuador (2014) (pp.13-14).

El Abogado Andres Javier Rousset Siri hace un estudio sobre la reparación integral en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que en su parte pertinente se destaca: **“2. El concepto de reparaciones en el SIDH.** La forma en la que una violación a los derechos humanos puede incidir y afectar la historia personal de la víctima y su entorno presenta un alto nivel de complejidad, la misma Corte IDH, en su sentencia sobre reparaciones del caso Aloeboetoe vs. Suriname señaló que: Todo acto humano es causa de muchas consecuencias, próximas unas y otras remotas. Un viejo aforismo dice en este sentido: causa causæ est causa causati. Piénsese en la imagen de una piedra que se arroja a un lago y que va produciendo en las aguas círculos concéntricos cada vez más lejanos y menos perceptibles. Así, cada acto humano produce efectos remotos y lejanos 5. La Corte IDH, en su jurisprudencia constante, ha señalado que “Las reparaciones, como el término lo indica, consisten en las medidas que tienden a hacer desaparecer los efectos de las violaciones cometidas. Su naturaleza y su monto dependen del daño ocasionado en los planos tanto material como inmaterial”. Esta definición es coherente con la base legal en la materia, esto es el artículo 63.1 de la CADH. El mismo dispone que: Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada. La Corte IDH ha puesto énfasis en señalar que el precepto del artículo 63.1 refleja una norma consuetudinaria que constituye uno de los principios fundamentales del Derecho Internacional contemporáneo sobre responsabilidad de un Estado 7. Este criterio, ha sido reconocido en la jurisprudencia de diferentes tribunales internacionales, marcando una constante en la materia. Así, la Corte Permanente de Justicia Internacional lo sostenía ya en el fallo de la Fabrica de Chorzów en el año 1928, posteriormente pasaría a ser utilizado por la Corte Internacional de Justicia en fallos como “Reparaciones por los Corte IDH. Caso Acevedo

*Jaramillo y otros Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 7 de febrero de 2006. Serie C No. 144, Párr. 175. 7 Corte IDH. Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala. Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de mayo de 2001. Serie C No. 77, Párr. 62; Corte IDH. Caso Rosendo Cantú y otra Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2010 Serie C No. 216, Párr. 203. Factory at Chorzów, Jurisdiction, Judgment No. 8, 1927, P.C.I.J., Series A, No. 9, pág. 21 y Factory at Chorzów, Merits, Judgment No. 13, 1928, P.C.I.J., Series A, No. 17, pág. 29 64 Andrés Javier Rousset Siri / El concepto de reparación integral en la... / 59–79 www.revistaidh.org, daños sufridos por el servicio de Naciones Unidas, criterios que finalmente adoptaría la Corte IDH en sus primeras sentencias, para luego hacerlos suyos y accionarlo en el devenir de su jurisprudencia. Asimismo, ha señalado el tribunal interamericano que el artículo 63.1 de la CADH ... distingue entre la conducta que el Estado responsable de una violación debe observar desde el momento de la sentencia de la Corte y las consecuencias de la actitud del mismo Estado en el pasado, o sea, mientras duró la violación. En cuanto al futuro, el artículo 63.1 dispone que se ha de garantizar al lesionado el goce del derecho o de la libertad conculcados. Respecto del tiempo pasado, esa prescripción faculta a la Corte a imponer una reparación por las consecuencias de la violación y una justa indemnización. Este doble alcance de la norma reparatoria, ha incidido cada vez con mayor frecuencia en el desarrollo de la jurisprudencia de la Corte IDH, dando lugar a una arquitectura reparatoria que tendrá como objetivo, no sólo borrar las huellas que en la víctima produjo el actuar del Estado, sino también evitar que ese tipo de hechos se vuelvan a repetir. **3. El concepto de reparación integral como pauta rectora...** podemos tomar como punto de partida un concepto de reparación integral cuyo eje se construya desde la premisa de que el pleno reestablecimiento de las obligaciones de respeto y garantía requiere un complejo diseño de medidas de reparación que tiendan, no sólo a borrar las huellas que el hecho anti-convencional ha generado, sino también comprensivo de las medidas tendientes a evitar su repetición. Las mismas no sólo tendrán como principal objetivo las consecuencias patrimoniales, sino que además se deberá trabajar en las medidas extrapatrimoniales. Especial interés debe revestir en este trabajo la víctima del caso. Para entender los diversos aspectos que puede comprender reparar una violación a los derechos humanos utilizaremos la clasificación de rubros reparables propuestos por el Relator Especial de Naciones Unidas, Theo van Boven, en el Proyecto de Principios y Directrices Básicos relativos a la reparación de violaciones flagrantes de los derechos humanos. La misma puede presentarse bajo las siguientes formas: 1) la restitución; 2) la indemnización; 3) Proyecto de vida; 4) la satisfacción y las garantías de no-repetición. En primer término, nadie dudaría de que la mejor respuesta al daño que se ha ocasionado sería el reestablecimiento de las cosas al estado anterior al evento dañoso, en palabras de la propia Corte: Es preciso tomar en consideración que en muchos casos de violaciones a derechos humanos, como el presente, no es posible la restitutio in integrum, por lo que, teniendo en cuenta la naturaleza del bien afectado, la reparación se realiza, inter alia, según la jurisprudencia internacional, mediante una justa indemnización o compensación pecuniaria. En cuanto a la indemnización pecuniaria, no cabe duda de que es uno de los*

elementos más recurrentes en el diseño de las medidas reparatorias, por su intrínseca capacidad de funcionar como elemento fungible, frente a aquellas cosas que no se podrán ya recuperar, tal como vimos en el párrafo anterior. La misma siempre ostentará carácter compensatorio y no sancionatorio. La finalidad de fijar montos indemnizatorios no tiene por objeto constituir una sanción por la conducta imputable a un Estado, sino que busca reparar las consecuencias del mismo. En la generalidad de los casos incluirá lo relativo al daño moral, como así también el daño emergente y el lucro cesante o pérdida de ingresos como también lo ha denominado la Corte IDH en su jurisprudencia.” Revista Internacional de Derechos Humanos / ISSN 2250-5210 / 2011 Año I – N0 1 www.revistaidh.org El concepto de reparación integral en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Al respecto cabe traer a colación lo que la Corte Interamericana dice: “La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que entre sus principales preocupaciones se encuentra la protección de la víctima y la reparación del daño. La mejor protección es impulsada por la aplicación de especiales criterios de interpretación y se refleja en la ampliación de las categorías de daño a través de la noción del daño al proyecto de vida; en el desarrollo del concepto de víctima, que se extiende a los familiares en casos de violación al derecho a la vida o integridad personal; y que en cuanto a las reparaciones se expresa en lo que la Corte ha denominado “otras medidas de reparación” cuyo objeto es a la vez que reparar a la víctima, ser una suerte de garantía de no repetición de los actos y que genera para los Estados obligaciones positivas, o de hacer. La Corte ha asumido un rol especialmente activo para su protección y reparación y en la valoración del daño.” Galdámez, L. (2012) Protección de la víctima, cuatro criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: interpretación evolutiva, ampliación del concepto de víctima, daño al proyecto de vida y reparaciones. Entonces se infiere que los juzgadores deben tener claro el método para cuantificar el daño causado y no solamente cumplir con un requisito que debe tener la sentencia, tanto más que tienen el respaldo de los principios y garantías constitucionales, deben considerar en el análisis la gravedad del daño causado a la víctima y sus consecuencias.

“La reparación refiere a un conjunto de medidas orientadas a restituir los derechos y mejorar la situación de las víctimas, así como promover que impidan la repetición de las violaciones. Estas medidas tiene dos objetivos: 1.- Ayudar a las víctimas a mejorar su situación, a enfrentar las consecuencias de la violencia, reconociendo su dignidad como personas y sus derechos. 2. Mostrar solidaridad con las víctimas y un camino para restablecer su confianza en la sociedad y las instituciones. Ayuda a enfrentar las consecuencias de las violaciones y promover su reintegración social.” Martín, Carlos (2008) Diálogos sobre la reparación. Experiencias en el Sistema Interamericano de derechos humanos. Tomo 2.

Los daños y perjuicios se refieren a la responsabilidad civil del daño causado, que provienen de un hecho ilícito, este debe contener los elementos de culpa, ilicitud o antijuridicidad, mientras que en la valoración a la reparación integral se encuentran el daño emergente, el lucro cesante, el daño moral, la restitución, la restauración, compensación o indemnización, rehabilitación, satisfacción, garantías de no repetición; como en el caso de una de las sentencias que como casos prácticos se ha adjuntado a esta trabajo referente al delito contra la vida que en otras obligaciones se impone que en forma solidaria restituyan la vivienda afectada por la caída del muro que causó la muerte, en las mismas condiciones de habitabilidad y funcionabilidad que tenía antes del colapso, esto es, un inmueble de una planta de hormigón armado, con áreas como cocina, comedor, sala dos habitaciones, baños.

Hay que hacer alusión al postulado del Art. 11 de la Constitución de la República del Ecuador vigente desde el año 2008, en el numeral 3 que establece: “Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte. Para el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales no se exigirán condiciones o requisitos que no estén establecidos en la Constitución o la ley. Los derechos serán plenamente justiciables. No podrá alegarse falta de norma jurídica para justificar su violación o desconocimiento, para desechar la acción por esos hechos ni para negar su reconocimiento; en concordancia con aquello y en forma conducente el Art. 78 de la Carta Magna trae el derecho que le asiste a la víctima cuando dice: “Las víctimas de infracciones penales gozarán de protección especial, se les garantizará su no revictimización, particularmente en la obtención y valoración de las pruebas, y se les protegerá de cualquier amenaza u otras formas de intimidación. Se adoptarán mecanismos para una reparación integral que incluirá, sin dilaciones, el conocimiento de la verdad de los hechos y la restitución, indemnización, rehabilitación, garantía de no repetición y satisfacción del derecho violado. Se establecerá un sistema de protección y asistencia a víctimas, testigos y participantes procesales.” (Constitución de la República del Ecuador, 2008).

El daño a ser indemnizado puede consistir en el daño material e inmaterial, en el primero de los casos debido a la causa u origen se establece el pago de una justa indemnización que debe ser fijada en términos que abarquen en lo posible la dimensión del daño causado, ya que éste debería ser el rol de la indemnización, en este daño material están inmersos el lucro cesante y el daño emergente; en cuanto al segundo caso, en este se incluye el daño moral de la víctima es decir, al aspecto que tiene ver con su ser interior, al daño psicológico, al sufrimiento, el padecimiento que puede producir en su psiquis, en lo físico, el cambio en el estilo de vida que tenía hasta antes de que hubiese sido objeto del delito, “Según la

teoría el daño moral coexiste con el daño al proyecto de vida de la víctima o viceversa el daño al proyecto de vida “coexiste con el daño moral”. Galdámez, L. (2012) Protección de la víctima, cuatro criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: interpretación evolutiva, ampliación del concepto de víctima, daño al proyecto de vida y reparaciones.

En la Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se establece: “Se ordena el pago de una cantidad de dinero por los daños inmateriales, pero además se incluye la adopción de medidas satisfactorias que reparen la intensidad del sufrimiento causado en la víctima y sus familiares, las alteraciones de las condiciones de existencia y demás consecuencias de orden no material.” Caso Tibi. (p. 61).

El daño inmaterial “puede comprender tanto los sufrimientos y las aflicciones causados a las víctimas directas y sus allegados, como el menoscabo de valores muy significativos para las personas, así como sus alteraciones de carácter no pecuniario en las condiciones de existencia de la víctima o su familia. Por cuanto no es posible asignar al daño material un preciso equivalente monetario, solo puede ser objeto de compensación de dos maneras: En primer lugar mediante el pago de una cantidad de dinero o la entrega de bienes o servicios apreciables en dinero en aplicación razonable del arbitrio judicial en términos de equidad. En segundo lugar mediante la realización de actos u obras de alcance o repercusión público, como el caso del compromiso tendiente a que no vuelvan a ocurrir, otros que tengan como efecto el reconocimiento de la dignidad de la víctima. Se debe tener en cuenta además que la sentencia es per se una forma de reparación, se debe ordenar el pago de una compensación por concepto de daños inmateriales, conforme a la equidad.” Caso Tibi. (pp. 61-62).

3.13.- Requisitos de la sentencia.-

Con el actual COIP ya no hace falta llegar a ser acusador particular para alcanzar esta finalidad específica como aclara el Art. 622 del COIP en concordancia con el numeral 1 del Art. 432 del mismo Código Orgánico Integral Penal, el artículo 622 dice: “**Requisitos de la sentencia.-** La sentencia escrita, deberá contener:

1. La mención del tribunal, el lugar, la fecha y hora en que se dicta; el nombre y el apellido de la o el sentenciado y los demás datos que sirvan para identificarlo.
2. La relación precisa y circunstanciada del hecho punible y de los actos de la o el sentenciado que el tribunal considera probados en relación a las pruebas practicadas.

3. Las consideraciones por las cuales se dé por probada o no, la materialidad de la infracción y la responsabilidad de los procesados, así como las pruebas de descargo o de atenuación de la responsabilidad.
4. La parte resolutive, con mención de las disposiciones legales aplicadas.
5. La determinación individual de la participación de la o las personas juzgadas en relación con las pruebas practicadas y la pena por imponerse, de ser el caso.
6. La condena a reparar integralmente los daños ocasionados por la infracción con la determinación del monto económico que pagará la persona sentenciada a la víctima y demás mecanismos necesarios para la reparación integral, con determinación de las pruebas que hayan servido para la cuantificación de los perjuicios cuando corresponda.
7. Cuando se determine la responsabilidad penal de la persona jurídica, la o el juzgador deberá verificar los daños a los terceros para poder imponer la pena.
8. Las costas y el comiso o la restitución de bienes o el producto de su enajenación, valores o rendimientos que hayan generado a las personas que les corresponde.
9. La orden de destruir las muestras de las sustancias por delitos de producción o tráfico ilícitos de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización.
10. La suspensión condicional de la pena y señalamiento del plazo dentro del cual se pagará la multa, cuando corresponda.
11. La firma de las o los juzgadores que conforman el tribunal.”

Reglas sobre la reparación integral en la sentencia.- En concordancia con el artículo 622 en el numeral 6 se encuentra el **Artículo 628 del COIP**: “Toda sentencia condenatoria deberá contemplar la reparación integral de la víctima, con la determinación de las medidas por aplicarse, los tiempos de ejecución y las personas o entidades públicas o privadas obligadas a ejecutarlas, de conformidad con las siguientes reglas:

1. Si hay más de un responsable penal, la o el juzgador determinará la modalidad de la reparación en función de las circunstancias de la infracción y del grado de participación en la infracción como autora, autor o cómplice.
2. En los casos en los que las víctimas han sido reparadas por acciones de carácter constitucional, la o el juzgador se abstendrá de aplicar las formas de reparación determinadas judicialmente.

3. La obligación de reparar monetariamente a la víctima tendrá prelación frente a la multa, comiso y a otras obligaciones de la persona responsable penalmente.

4. Si la publicación de la sentencia condenatoria es el medio idóneo para reparar a la víctima, correrá a costa de la persona condenada.”

De éste articulado se desprenden tanto los requisitos que debe contener la sentencia como las reglas sobre la reparación integral a la víctima, sobresaliendo el hecho de que en el numeral 6 del Art. 622 íbidem se establece que la condena debe reparar integralmente los daños ocasionados por la infracción con la determinación del monto económico que pagará la persona sentenciada a la víctima y demás mecanismos necesarios para la reparación integral, con determinación de las pruebas que hayan servido para la cuantificación de los perjuicios cuando corresponda a la víctima como sujeto activo de la relación procesal.

Con el anterior Código de Procedimiento Penal según el Art. 68 el Acusador Particular era el directamente ofendido por el delito y a falta de éste la cónyuge o conviviente en unión de hecho, por lo que según el Art. 69 del mencionado Código es un derecho del ofendido y para que se admita a trámite debía cumplir con los requisitos y formalidades que establecía el Art. 55 íbidem, esto cuando existía acusación particular.

En el otro caso, cuando no se proponía acusación particular el ofendido podía ser llevado únicamente a dar testimonio en el juicio, una vez pronunciada y ejecutoriada la sentencia, si ésta era condenatoria, la víctima podía acudir y demandar ante un Juez de lo Civil en vía verbal sumaria la indemnización de daños y perjuicios.

Por tanto, dentro del proceso penal no se necesita la aquiescencia o permiso del acusador particular para que se proceda a restituir el daño causado a través de la reparación integral.

La Dra. Mariana Yépez Andrade, enfoca que la teoría de la pena asumida por el Estado es la de prevención general, la misma que consiste en ver a la pena como forma de prevención frente a los ciudadanos, que para el efecto, el profesor Alberto Donna manifiesta: “La pena tiene como objetivo su conminación como intimidación de todos, como posibles protagonistas de futuras lesiones jurídicas, tiene como objetivo la aplicación efectiva de la sanción legal.”; que en cambio la Prevención General Positiva, elaborada por Roxin enfrenta al delito de tres maneras: a) la misión del derecho penal es la de proteger bienes jurídicos, que amenaza a la sociedad, siendo este el momento clave de la prevención general; b) la pena se impone y se mide judicialmente; y, c), las penas se deben ejecutar teniendo en cuenta la resocialización del delincuente y su reinserción en la sociedad.

“En este sentido, la finalidad de la pena de acuerdo a lo señalado por el COIP es la prevención general positiva, y por tanto la reparación del derecho de la víctima es obviamente parte de la pena, tanto es así que en la sentencia en la que se declare la culpabilidad, los Jueces deben disponer la reparación integral de la víctima siempre que se hubiere identificado, y consta además como un requisito formal de la sentencia y una exigencia declarativa junto a la condena.”

“Por lo expresado, la reparación integral es una pena, conclusión que tiene sustento además en las soluciones que da Claus Roxin para elaborar jurídicamente la idea de la reparación: a) La composición privada del conflicto; b) La incorporación de la reparación como una tercera clase de pena, junto a la privativa de la libertad y a la multa; y, c) La introducción de la restitución en el derecho Penal como fin de la pena. Afirma además que sería recomendable “construir la reparación al lado de la pena y la medida, como un “tercer carril” del Derecho Penal” (La reparación en el sistema de los fines de la pena, en “De los delitos y de las víctimas” Buenos Aires, Ad-Hoc)”

En la legislación penal ecuatoriana se aplica el modelo de sanción de reparación, como parte de la sentencia condenatoria, y debería ser también el de conciliación. En todo caso, la reparación es una pena y también es un derecho que contempla varios aspectos que han sido definidos en los instrumentos internacionales y en las sentencias de la Corte Interamericana, pero en cualquier forma que sea es una medida que tiende a concluir conflictos sociales derivados del delito, en una forma más ágil y menos traumática. Sobre este tema, acertadamente dice Zaffaroni en su informe sobre sistemas penales y derechos humanos en América Latina: “La reparación del daño es una medida de “pacificación social”, por lo que debe fomentarse, haciendo que el condenado prueba haber indemnizado a la víctima antes de obtener cualquier beneficio, creando fondos de reparación, posibilitando la extinción o suspensión de la acción penal cuando el procesado hubiere reparado el daño, extendiendo el plazo de la prescripción a la acción civil emergente, etc.” (Yépez, 2014).

Casos Prácticos de Sentencias

Análisis de tres sentencias en las que se impone reparación integral cuando se ha propuesto acusación particular, sin que en ninguna de ellas se haga referencia a la acusación particular para fijar su monto, dentro de las cuales podemos citar:

Primer caso.-

A la sentencia pronunciada por el Tribunal de Garantías Penales con sede en el cantón Ambato, de la provincia de Tungurahua, en el juicio número 18100-2016-0001, el nueve de septiembre del dos mil dieciséis, en un delito de Estafa Inciso 1, dice: “...En relación a la reparación integral la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Reverón Trujillo señaló:

“Conforme la Jurisprudencia de la Corte, las reparaciones son medidas que tienden a hacer desaparecer los efectos de las violaciones cometidas. La reparación del daño ocasionado por la infracción requiere, siempre que sea posible, la plena restitución [restitutio in integrum], la cual consiste en el restablecimiento de la situación anterior. De no ser esto posible cabe determinar una serie de medidas, para además de garantizar los derechos conculcados, reparar las consecuencias que la infracción produjo, así como establecer el pago de una indemnización como compensación por los daños ocasionados”. SEPTIMO.- RESOLUCIÓN.- Que la prueba señalada en los considerandos anteriores, ha sido pedida, ordenada, practicada e incorporada en la audiencia de juicio como lo dispone el Art. 454 del Código Orgánico Integral Penal, en concordancia con el Art. 615 ibídem, teniendo plena validez, la misma que ha sido valorada de acuerdo a lo que establece el Art. 457 del citado cuerpo legal. Conforme el nuevo paradigma penal nos encontramos en un proceso penal en el que según el Art. 5 del COIP la o el juzgador, para dictar sentencia condenatoria, debe tener el convencimiento de la culpabilidad penal de la persona procesada, más allá de toda duda razonable, y en este sentido se ha llegado a tener el pleno convencimiento que los procesados son responsables del delito tipificado en el Art. 186 inciso 3 del COIP con la circunstancia de haber perjudicado a más de dos personas, más allá de toda duda razonable. En la dogmática del derecho penal existe en lo sustancial acuerdo en cuanto a que toda conducta punible supone una acción típica, antijurídica, culpable y que cumple otros eventuales presupuestos de punibilidad, por tanto, toda conducta punible presenta cuatro elementos comunes: acción, tipicidad, antijuricidad y culpabilidad, lo que a su vez viene acompañado del dolo que describe el Art. 26 del COIP al indicar que, “actúa con dolo la persona que tiene el designio de hacer daño”, con la circunstancia agravante del Art. 47. 5 ibídem. Por lo expuesto, ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, se dicta en contra de: Martha Cecilia Cusangua Chávez, ecuatoriana, de 45 años, divorciada, domiciliada en Av. Bolivariana y Víctor Hugo, instrucción secundaria, nacida en Ambato el 3 de septiembre de 1971, con C.C. 1802495562. Dra. Jeanette Alexandra Lascano Betancourt, ecuatoriana, de 52 años de edad, casada, domiciliada en Ficoa, Las Palmas, Abogada, nacida en Ambato el 13 de febrero de 1964, con C. C. 180185890, sentencia condenatoria, en calidad de coautoras (Art.42.3 Código Orgánico Integral Penal) del delito tipificado y sancionado en el Art. 186, inciso 3 del Código Orgánico Integral Penal con la agravante del Art. 47.5 ibídem. El Art. 44 inciso final del Código Orgánico Integral Penal señala que si existe al menos una circunstancia agravante no constitutivas o modificatorias de la infracción, se impondrá la pena máxima prevista en el tipo penal, aumentada en un tercio; por su parte el Art. 47 Ibídem señala que son circunstancias agravantes de la infracción penal: cometer la infracción con participación de dos o más personas, que es como se ha cometido esta infracción conforme queda analizado, consiguientemente, si a la pena

máxima del Art. 186 inciso 3 que es de 10 años, se le aumenta un tercio, se les impone a las acusadas Martha Cecilia Cusangua Chávez y Dra. Jeanette Alexandra Lascano Betancourt la pena individual de 13 años, 4 meses de privación de libertad a ser cumplidos en el Centro de Privación de Libertad de personas adultas que corresponda, debiendo descontarse el tiempo que hayan permanecido detenidas por esta misma causa y la multa individualizada de veinte salarios básicos unificados del trabajador en general conforme a los prescrito en los Arts. 69 numeral 1 y 70 numeral 9 del Código Orgánico Integral Penal, que deberá ser cancelada de manera inmediata una vez ejecutoriada la sentencia. Como reparación integral se manda a pagar a 1) Martha Cecilia Chávez Cusangua en forma solidaria con la sentenciada en Procedimiento Abreviado Patricia Carlina Llerena Paredes de la siguiente manera: a Doris Tatiana Bonilla Pico, siete mil ochocientos cincuenta dólares de los Estados Unidos de Norte América; 2) Dra. Jeanette Alexandra Lascano Betancourt también en forma solidaria con Patricia Carlina Llerena Paredes se ordena que pague de la siguiente manera: a María Sol Poveda Montufar, siete mil dólares de los Estados Unidos de Norte América; Luis Alberto Bayas Jiménez, seis mil dólares de los Estados Unidos de Norte América; Edwin Ricardo Carranza Benalcázar, cinco mil doscientos dólares de los Estados Unidos de Norte América; Ligia Del Consuelo Pilco Lozada, tres mil quinientos dólares de los Estados Unidos de Norte América; Galo Vinicio Guachi Moya, tres mil dólares de los Estados Unidos de Norte América; María Fernanda Ramírez Lozada, doce mil dólares de los Estados Unidos de Norte América. La reparación integral de las demás víctimas se encuentra ordenada en sentencia del Procedimiento Abreviado al que se acogió la señora Patricia Llerena. Se declara en interdicción a las personas sentenciadas Martha Cecilia Cusangua Chávez y Dra. Jeanette Alexandra Lascano Betancourt mientras dure el tiempo de la pena al amparo del Art. 56 del COIP, se suspende el derecho al sufragio de las sentenciadas mientras dure el tiempo de la condena al amparo de lo prescrito en el Art. 64 numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador en concordancia con el Art. 12 numeral 8 del COIP y Art. 81 del Código de la Democracia.- Una vez ejecutoriada la sentencia ofíciase al Consejo Nacional Electoral haciéndose conocer sobre la pérdida de los derechos políticos de las personas sentenciadas. Con relación Magaly Maribel Perlaza Mina, ecuatoriana, de 25 años de edad, unión libre, empleada doméstica, instrucción secundaria incompleta, nacida en Esmeraldas el 12 de febrero de 1991, domiciliada en Pinllo con C. C. 1804020897, se confirma su estado de inocencia, debiéndose revocarse todas las medidas cautelares que pesen en su contra.- Se manda agregar al expediente los escritos presentados por Martha Cecilia Cusangua Chávez y Jeanette Alexandra Lascano Betancourt, proveyendo lo mismo, confiérase copias certificadas de los audios de grabación de la audiencia de juzgamiento llevada a cabo dentro de la presente causa. Se niega lo solicitado por la Dra. Jeanette Lascano en su escrito número 2, por no ser procedente. Respecto del Recurso de Apelación manifestado en forma verbal por la Dra.

Jeanette Lascano Betancourt, luego de dar a conocer la decisión judicial, se observará lo establecido en el Art. 654.1 del Código Orgánico Integral Penal.”

Segundo Caso.-

La sentencia emitida por el Tribunal de Garantías Penales con sede en el cantón Ambato dentro del proceso N° 18282-2015-01039 por el delito de falsificación de documentos, con fecha veinticuatro de marzo del dos mil dieciséis: “...NOVENO: RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL. De lo analizado, este Tribunal de Garantías llega al convencimiento de que la abogada Carmen Yolanda Castillo Guevara y, el abogado Héctor Rolando Lascano Cevallos, cometieron el delito previsto en el Art. 339, en relación con el Art. 341 del Código Penal vigente a la fecha del cometimiento de la infracción; actuaron con conciencia y voluntad para conseguir un resultado deseado, esto es una sentencia en materia civil que mande a pagar la suma requerida y se embargue un inmueble; la actuación es dolosa. Para justificar sus buenos antecedentes personales, presentaron los testimonios de los ciudadanos Gustavo David Santamaría Ulloa y, Andrés Daniel Garrido Tapia, quienes manifestaron conocer al abogado Héctor Lascano como una persona de magnífica conducta; y los testigos Martha Cecilia Sánchez Solís y, Gloria Eliza Sánchez Villarreal, que conocen a la abogada Carmen Yolanda Castillo como una persona de magnífica conducta, circunstancias atenuantes señaladas en los numerales 6 y 7 del Art. 29 del Código Penal, que al no existir ninguna agravante obligan a modificar la pena a imponerse al tenor de lo señalado en el Art. 72 ibídem, que dice: “La reclusión menor ordinaria de seis a nueve años se sustituirá con prisión correccional de dos a cinco años”. Por todo lo expuesto: ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPUBLICA, en convencimiento de que se hallan reunidos los requisitos señalados en los Art. 250, 304-A del Código de Procedimiento Penal; que son autores del delito previsto en el Art. 339, en relación con el Art. 341 del Código Penal, se les impone a la ABOGADA CARMEN YOLANDA CASTILLO GUEVARA, de nacionalidad ecuatoriana, 36 años de edad, nacida en la ciudad de Pelileo el 01 de Diciembre de 1.979, profesión Abogada, vive en las calles Agramonte y Manuelita Sáenz de la ciudad de Ambato, C.I. 1803236189; y al ABOGADO HÉCTOR ROLANDO LASCANO CEVALLOS, de nacionalidad ecuatoriana, 34 años de edad, nacido en la ciudad de Ambato el día 18 de Enero de 1.981, profesión abogado, estado civil soltero, vive en la ciudadela Cumandá, C.I. 1803308525; la pena atenuada de DOS AÑOS DE PRISION CORRECCIONAL A CADA UNO, que la cumplirán en el Centro de Privación de Libertad de Personas Adultas que corresponda, debiendo descontarse el tiempo que hubieren permanecido detenidos por esta misma causa. Cumpliendo con lo dispuesto en los Art. 60 del Código Penal, se les suspende los derechos de ciudadanía por un tiempo igual al de la condena, debiendo para el efecto oficiarse a la Consejo Provincial Electoral. Como reparación integral, se manda a pagar la suma de cinco mil dólares en forma solidaria. En trescientos dólares se fijan los

honorarios del Dr. Luis Chipantiza, defensor de las acusadoras particulares. Es importante anotar, que si bien el Art. 306 del Código de Procedimiento Penal señala que la sentencia se elaborará dentro de tres días posteriores al pronunciamiento, el Art. 288 del Código de Procedimiento Civil, norma supletoria, señala que si fuere más de cien hojas, se agregará un día por cada cien hojas. Notifíquese.”

Tercer Caso.- La sentencia dictada por la Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia de Tungurahua, dentro del juicio N° 18100-2013-0018 delitos contra la vida, el seis de noviembre del dos mil catorce, se ha pronunciado lo siguiente en su parte pertinente: “...1.- La Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia de Tungurahua, declara a los ciudadano, LUIS MEDARDO CHILQUINGA GUAMBO, ALCALDE del cantón San Cristóbal de Patate; NELSON PARMÉNIDES VILLACÍS ALARCÓN, Director de Obras Públicas del GAD Municipal San Cristóbal de Patate (e), y a EDWIN SALOMÓN MORENO CASTILLO, Director de Obras Públicas del GAD Municipal San Cristóbal de Patate, culpables en calidad de autores conforme el Art. 42 del Código Penal, al haber adecuado su conducta al tipo penal tipificado en el Art. 459 del mismo Cuerpo Legal y sancionado en el Art. 460 ibídem, esto es Homicidio Inintencional; Para el caso de los dos primeros: Lic. Luis Medardo Chiliquinga Guambo e Ing. Nelson Parménides Villacís Alarcón, les impone la pena atenuada de UN AÑO DE PRISIÓN CORRECCIONAL A CADA UNO, conforme lo establecido en el Art. 73 del Código Penal, en consideración a las atenuantes justificadas del Art. 29 numerales 6 y 7 ibídem; y, 1.2.- Para el tercero: Arq. Edwin Salomón Moreno Castillo, pena de DOS AÑOS DE PRISIÓN CORRECCIONAL. 1.1.- imponiéndoles una multa de veinte dólares de los Estados Unidos de Norteamérica a cada uno, para los dos primeros Lic. Luis Medardo Chiliquinga Guambo e Ing. Nelson Parménides Villacís Alarcón; al tercero Arq. Edwin Salomón Moreno Castillo, una multa de treinta y un dólares de los Estados Unidos de Norteamérica; al tenor del Art. 460 del Código Penal. 1.2.- Cumpliendo con lo dispuesto en el Art. 60 ibídem, se dispone la interdicción política, se suspende los derechos de ciudadanía de los sentenciados por el tiempo que dure la condena impuesta. 1.3.- Como reparación integral, conforme lo expresado en la consideración "OCTAVA", por cuanto se produce la muerte de tres personas: José Luis Mesías Ojeda, Isaac Leonel Mesías Ojeda y Johana Micaela Mesías Ojeda de 22, 15 y 6 años de edad respectivamente, por lo que para efectos de indemnización en causa de muerte, se estará a lo dispuesto en el Art. 369 inciso primero del Código de Trabajo, esto es, "...indemnizar a los derechohabientes del fallecido con una suma igual al sueldo o salario de cuatro años...", por cada uno de los muertos; si se toma en cuenta que el Salario Básico Unificado del Trabajador en General, para el año 2012 era de 292 USD, determina un valor de 14.016 USD (292 USD x 12 meses x 4 años) por muerte, por lo que al ser tres fallecidos se tiene la suma de 42.048 USD, que cada uno de los acusados tendrá que sufragar en forma inmediata a la ejecutoriedad de esta resolución a

favor de los acusadores particulares. 1.4.- También dispone que los acusados Lic. LUIS MEDARDO CHILQUINGA GUAMBO, Ing. NELSON PARMÉNIDES VILLACÍS ALARCÓN y Arq. EDWIN SALOMÓN MORENO CASTILLO, en forma solidaria restituyan la vivienda afectada por la caída del muro que causó la muerte que en este proceso se juzga, en las mismas condiciones de habitabilidad y funcionabilidad que tenía antes del colapso, esto es, un inmueble de una planta de hormigón armado, con áreas como cocina, comedor, sala dos habitaciones, baños según se observa en el informe pericial de reconocimiento del lugar de los hechos (ref. fs. 169 a 185, fs. 396 a 443 «numeración de Fiscalía»; y, fs. 485 a 501-numeración de esta instancia-), a satisfacción de los acusadores particulares, dentro del plazo de noventa días a contarse desde la ejecutoria de la presente resolución, sobre el inmueble que los acusadores particulares determinen; 1.5- En cuanto a SEGUNDO MARIANO SIGCHO LANDA, a quien el titular de la acción penal, el Fiscal Provincial de Tungurahua, en la correspondiente audiencia de juicio se abstuvo de acusarlo, al tenor de lo dispuesto en el Art. 251 del CPP, que establece "...si no hay acusación fiscal, no hay juicio...", se confirma su estado de inocencia y se dispone se revoquen todas las medidas cautelares personales y reales dispuestas en su contra. No se establece malicia o temeridad en la denuncia y/o acusación particular. 2.- Los procesados LUIS MEDARDO CHILQUINGA GUAMBO, EDWIN SALOMON MORENO CASTILLO, NELSON PARMENIDES VILLACÍS ALARCÓN; así como MESIAS SARABIA JOSE REINALDO (PROCURADOR COMUN DE ACUSADORES PARTICULARES, interponen recurso de apelación. La Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Tungurahua, en sentencia dictada el 21 de octubre del 2015 a las 08H04, Admite parcialmente el recurso vertical de impugnación deducido por el procurador común de los acusadores particulares, señor Mesías Sarabia José Reinaldo, disponiendo que en forma solidaria los procesados, señores Chiliquinga Guambo Luis Leonardo, Moreno Castillo Edwin Salomón, y Villacís Alarcón Nelson Parménides, por concepto del área del terreno sobre el que se encontró la construcción destruida paguen la cantidad de cinco mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, tomando en consideración el lugar y el área que se necesita para la construcción de la vivienda unifamiliar; y la suma de quince mil dólares para la edificación de la casa de más o menos ochenta metros cuadrados de superficie, tipo unifamiliar, con acabados modestos, en el sector Leitillo. Estos valores serán cubiertos a prorrata por los tres acusados dentro del plazo de noventa días contados a partir de la ejecutoria de la presente sentencia. 2.1) Aceptar parcialmente el recurso de apelación formulado por el señor Moreno Castillo Edwin Salomón, en cuanto a la duración de la pena, reduciéndola de dos años a dieciocho meses de prisión correccional. 2.2) Rechazar el recurso de apelación formulado por el señor Chiliquinga Guambo Luis Medardo, confirmando la resolución subida en grado jurisdiccional en todas sus partes en cuanto a este procesado, con la reforma respecto de la reparación integral que se indicó anteriormente."

Criterio Jurídico de las Sentencias

En las tres sentencias aludidas después de haber comprobado la responsabilidad penal se les condena a los acusados a las penas prevista en el Código Penal, esto es prisión, al pago de multa y al resarcimiento como reparación integral sin que en ninguna de aquellas se mencione que por el hecho de haber presentado acusación particular se les reconozca a título de reparación integral la indemnización que allí consta, sino que los funcionarios judiciales en virtud de que en la sentencia se debe contemplar la reparación integral lo hacen en forma directa, ratificándose el hecho de que para los delitos de acción pública no es necesario el presentar una acusación particular.

Cuarto Caso.- En la Gaceta Judicial serie 1 XVIII página 160 y 169 dentro de la resolución N° 363-2004 Juicio N° 470-2003 en el juicio penal por peculado en perjuicio del I, Municipio de Cumandá propuesto contra Edgar Mateo Maquisaca Bermeo, la Corte Superior de Justicia de Riobamba ha dictaminado: “...Prueba de la Acusación Particular.- Formula el Dr. Edgar Byron Almeida Inca, en su calidad de Procurador Síndico de la I. Municipalidad del cantón Cumanda: 1) Se adhiere a toda la prueba presentada por el señor Ministro Fiscal; 2) Solicita la declaración de Carlos Octaviano Pilco Siguencia; 3) Que se tenga como prueba el informe de Auditoría; 4) Además también la versión rendida por Jorge Andrade Cabrera quien no puede comparecer por incapacidad física y que consta de fs. 124 vlta...Consiguientemente, **“ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY”**, dicta sentencia condenatoria en contra de Edgar Mateo Maquisaca Bermeo, con cédula de ciudadanía 060027825-3, casado, ecuatoriano de 55 años de edad, agricultor, actualmente prófugo; ...Además se les condena al pago del duplo de la cantidad de cemento que ha ocasionado perjuicio al Municipio de Cumandá. Acéptase la acusación particular y se les condena al pago de las indemnizaciones civiles consecuentes de la infracción. Ejecutoriada esta sentencia, ofíciase a las autoridades de Policía para la captura de los sentencias. Léase esta sentencia y notifíquese.”

He invocado ésta sentencia a fin de establecer la diferencia que existe entre las actuales sentencias y las resoluciones anteriores cuando la acusación particular debía presentarse para que en sentencia se condene al pago de las indemnizaciones civiles por el delito provocado.

CAPITULO IV

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones:

- 1.- Del estudio realizado del marco legal vigente en el Ecuador se pone de manifiesto que la acusación particular se puede presentar tanto en los delitos de acción penal pública como en los delitos de acción penal privada (querella).
- 2.- En los delitos de acción penal pública se desprende que no es necesaria la presentación de la acusación particular para que a la víctima le sea reconocido su derecho a la reparación integral por el daño causado, ya que éste es un requisito de la sentencia per se, tanto más que la Constitución de la República del Ecuador, como garantista de derechos en su Art. 75 establece que “toda persona tiene derecho al acceso gratuito de la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de inmediación y celeridad”, que es concordante con el principio de la progresividad de los derechos, que además los Jueces son garantistas de los derechos de las partes, que deben velar por el cumplimiento del derecho de la víctima, cuando se dicte una sentencia condenatoria, en concordancia con el Art. 82 de la Carta Magna: “El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y a la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes.”
- 3.- Luego del trabajo realizado se llega a la conclusión de que la acusación particular no cumple ninguna función que se pueda destacar, ya que el derecho de la víctima a ser indemnizado se encuentra establecido en la Constitución de la República del Ecuador y en los requisitos de la sentencia del Código Orgánico Integral Penal a fin de evitar la revictimización del ofendido.

Recomendaciones:

- 1.- Se debe enviar un proyecto de Ley a la Asamblea Nacional, a fin de que se estudie y analice la derogación del Código Orgánico Integral Penal del capítulo referente a la Acusación Particular, artículos del 432 al 438, en los delitos de acción penal publica para que la víctima no se vea avocada a recordar el delito perpetrado en su contra.
- 2.- Analizar y comparar la figura legal de la acusación particular en otras legislaciones, a fin de respaldar la necesidad de su derogatoria de nuestra legislación.
- 3.- Estudiar las probables repercusiones que ocasiona la existencia de la figura de la acusación particular en el COIP, que pueden ir en detrimento de la integridad de las víctimas de un delito de acción penal pública como sería el hecho de que se declare maliciosa y temeraria a la acusación.

BIBLIOGRAFIA

Libros

1. FLORIÁN, Eugenio. (1934). *Elementos de Derecho Procesal Penal*. Barcelona, España: Bosch. (p. 14)
2. GALDÁMEZ, Liliana. (2012). *Protección de la víctima, cuatro criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: interpretación evolutiva, ampliación del concepto de víctima, daño al proyecto de vida y reparaciones*. (p.6)
3. GARITA, A. (1991) *El Ministerio Público en América Latina.- Desde la perspectiva del Derecho Procesal Penal moderno*. Ilanud. (p.111).
4. GUERRERO, Walter. (2004). *Derecho Procesal Penal*. Pudeleco Editores. (pp.63-67)
5. MANZINI, Vincenzo. (1951). *Tratado de Derecho Procesal Penal*. Volumen 1 Ediciones Jurídicas Europa América. (pp.108-109)
6. MARTIN, Carlos. (2008). *Diálogos sobre la reparación. Experiencias en el Sistema Interamericano de derechos humanos*. Tomo 2.
7. ORTIZ, F. (2008) *Ponencia La Acción Penal Privada en la Reforma Constitucional*. Mexico (p.3).
8. POVEDA, C. (2008) *Módulo Teoría y Técnica de la Prueba*. Universidad Tecnológica Indoamérica.
9. PRIETO, Luis. (1976) *Derecho Procesal Penal España*. Madrid: Editorial Tecnos S.A. (p. 81)
10. SÁNCHEZ, Jesús. (2001). *Int Detr; ¿ex delicto? Aspectos de la llamada "Responsabilidad Civil", en el proceso penal*. Universitat Pompeu Fabra; Barcelona, España.
11. VACA, Ricardo. (2014). *Derecho Procesal Penal Ecuatoriano*. Quito, Ecuador. Ediciones Legales EDLE S.A. (p.481-482-486-490)
12. ZAVALA, Jorge. (1990). *El proceso penal*. Edino Jurídico.
13. ZÚÑIGA, Ledy. (2014). *Serie Justicia y Derechos Humanos Neoconstitucionalismo y Sociedad Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos Subsecretaría de Desarrollo Normativo* Primera Edición. (p.5)

Artículo de prensa en línea

1. Reparación de la víctima es una garantía en el COIP. *El Telégrafo*. Recuperado de: [http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/judicial/13/la-reparacion-de-la-victima-es-una-garantia-en-el-coip,\(2014\)](http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/judicial/13/la-reparacion-de-la-victima-es-una-garantia-en-el-coip,(2014))

Sitios Web

1. Corte Constitucional del Ecuador. www.corteconstitucional.gob.ec.
2. Pérez, Julian y Gardey, Ana. Publicado: (2009). Actualizado: 2009. Definicion.de: Definición de acción penal (<http://definicion.de/accion-penal/>)

3. Rousset, Andres. (2011) Revista Internacional de Derechos Humanos / ISSN 2250-5210 / 2011 Año I – N0 1 www.revistaidh.org El concepto de reparación integral en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
4. Yépez, Mariana (2014) Recuperado de: marianayepez@uio.satnet.net.

Tesis

1. León, B (2012). *La indemnización de daños y perjuicios en la sentencia penal* (Tesis de Especialista en Derecho Penal). Universidad de Cuenca, Ecuador.

Normas Jurídicas

1. Asamblea Nacional. (2008). Constitución de la República del Ecuador. Quito, Ecuador: Edipcentro. Registro Oficial N° 449.
2. Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos. (2014). Código Orgánico Integral Penal (COIP). Quito, Ecuador: Gráficas Ayerve C. A. Registro Oficial Suplemento N° 180.
3. Diccionario Jurídico Elemental-Practico y Pedagógico de la Distribuidora Jurídica Nacional (2001).

Resoluciones

1. Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Tibi vs. Ecuador, voto recurrente y razonado del Juez Sergio García Ramírez Sentencia del 07 de septiembre del 2004.
2. SENTENCIA dictada por el Tribunal de Garantías Penales con sede en el cantón Ambato, de la provincia de Tungurahua, en el juicio número 18100-2016-0001, el nueve de septiembre del dos mil dieciséis, en un delito de Estafa Inciso 1.
3. SENTENCIA pronunciada por el Tribunal de Garantías Penales con sede en el cantón Ambato dentro del proceso N° 18282-2015-01039 por el delito de falsificación de documentos.
4. SENTENCIA dictada por la Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia de Tungurahua, dentro del juicio N° 18100-2013-0018 delitos contra la vida.
5. SENTENCIA emitida por la Corte Superior de Justicia de Riobamba dentro del Juicio N° 470-2003 por peculado en perjuicio del I. Municipio de Cumandá.